

## Democratización y otro desarrollo: el caso chileno\*

MANUEL ANTONIO GARRETÓN M.

Este trabajo, intenta solamente problematizar el tema del "otro desarrollo" en el caso chileno desde una perspectiva que enfatiza el análisis social y político, dejando en la penumbra o apenas enunciados los aspectos relacionados con las estrategias de desarrollo. Se trata, como se desprenderá de la lectura del texto, de un intento de análisis global pero a partir de un enfoque parcial, de un corte decididamente "unilateral" de la realidad que obedece tanto a las capacidades o incapacidades del autor como a

---

\* Este trabajo fue preparado en julio-agosto de 1978, para el Grupo de Estudio "From the village to the global order. A phased Seminar to concretise the conceptual framework for Another Development", de la Fundación Dag Hammarskjöld, Suecia. Dada su naturaleza y para no dificultar el desarrollo de la exposición hemos omitido la argumentación en que se basan muchas de las afirmaciones y que ha sido expuesta en otros trabajos realizados, algunos en colaboración, por el autor. Tampoco hemos querido abundar en la demostración a través de información cuantitativa, cuyas fuentes se indicarán también en las Notas.

Señalemos que muchas de las ideas aquí desarrolladas han tenido origen en diversos seminarios, grupos de trabajo, elaboración de documentos y discusiones en los que el autor ha participado en el último tiempo, de modo que si asumo la responsabilidad exclusiva de lo que aquí se plantea, debo también reconocer una gran deuda intelectual con muchas personas que han participado en tales actividades, y cuyos aportes han sido de uno u otro modo, recogidos en las páginas siguientes. Entre tales aportes quiero destacar los de Enzo Faletto, Eduardo Palma, pese a nuestras diferencias ideológicas, Humberto Vega quien facilitó la información económica y, muy especialmente, Tomás Moulian. No pudiendo dar cuenta de esta deuda en citas precisas y detalladas dejo testimonio general de mi reconocimiento al respecto. Finalmente, quiero agradecer los valiosos comentarios de Pablo González Casanova, Juan Somaía, Julio Labastida, Fernando Fanjzilber, Sergio Zermeño y los asistentes al Seminario de Discusión realizado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en agosto 1979, que me han permitido revisar parcialmente la versión original. Reconozco que muchos de tales comentarios me habrían obligado a una revisión más profunda, lo que por razones de tiempo y espacio no ha sido posible.

ciertas razones ligadas al tema y que intentan ser explicadas en la primera parte del trabajo. El esfuerzo de interpretación global, a partir de esta perspectiva, explica así el carácter necesariamente general, esquemático e hipotético de gran parte del contenido y sus indudables insuficiencias.

El trabajo está dividido en cuatro partes. La primera fundamenta la perspectiva del análisis sociopolítico. La segunda recapitula los rasgos principales del desarrollo social chileno. La tercera analiza las características del proyecto social vigente y las evalúa desde las perspectivas del "otro desarrollo". La cuarta desarrolla las relaciones entre otro desarrollo y proceso de democratización, concebido como el "nudo vital" del primero en el caso chileno.

#### I. LA PERSPECTIVA: PROBLEMÁTICA SOCIOPOLÍTICA DEL OTRO DESARROLLO

Desde hace algún tiempo han ido tomando cuerpo aquí y allá un conjunto de ideas articuladas en torno a la redefinición del concepto de desarrollo y a la reformulación de las estrategias. Tales redefiniciones y reformulaciones están vinculadas a las diversas crisis que se han hecho patentes en el curso de esta década, al relativo fracaso de las expectativas en torno a las "décadas o decenios para el desarrollo", al surgimiento de demandas de transformación de las condiciones de vida, que se constituyen en novedosos movimientos sociales, a la frustración de procesos sociales que se anunciaban como intentos de superación de los patrones tradicionales de desarrollo, a la consolidación de sistemas sociales cuya regresividad evoca épocas primitivas de barbarie, al cansancio general que se expresa ya sea en la apatía ya en formas explosivas de rebeldía, etcétera.

Las crisis y frustraciones de procesos sociales en los que se cifraban las expectativas son necesariamente crisis también de los marcos teóricos con que tales procesos y movimientos fueron analizados y visualizados. De modo que la revisión de los conceptos y la búsqueda de una reformulación global de la problemática aparece como una tendencia natural. Sin duda que en un primer momento tales intentos parecen cargados de voluntarismo y corren el riesgo de "botar al niño junto con la bañera", es decir, de desprenderse del instrumental que permitió la acumulación teórico-crítico a los modelos capitalistas y sacrificarlo en aras de una conceptualización que pretendiendo liberarse de dogmatismos olvida ciertas adquisiciones básicas del patrimonio analítico.<sup>1</sup> Sin embargo, tal búsqueda aparece como indispensable, y a la desagregación de un mundo cuyos patrones parecían definidos a mediados de siglo corresponde necesaria-

<sup>1</sup> La discusión del seminario del Programa de Desarrollo Social y Humano de la Universidad de Naciones Unidas (México, Noviembre de 1977), especialmente en torno al Proyecto "Metas, procesos e indicadores del desarrollo" da cuenta acertada de este problema.

mente la desagregación de los modelos conceptuales con que se le analizaba.

Es de esta búsqueda que ha ido surgiendo el concepto de "otro desarrollo", que intenta reformular la problemática y estrategia del desarrollo. Más que una escuela o una teoría, se podría decir que hay un horizonte intelectual en el que convergen aún diferentes escuelas y teorías. Es un concepto a la búsqueda de sí mismo y, sobre todo, de referentes que en el plano de la vida social le den un contenido de valor práctico a la utopía y el voluntarismo. Si bien su acumulación es aún incipiente, aparece como un espacio intelectual de convergencia para quienes no aceptan el *statu quo* de un orden mundial, nacional y local que contradice las posibilidades abiertas a la humanización.

No es del caso hacer aquí una exposición detallada del contenido de las concepciones en torno al "otro desarrollo" ni menos una evaluación crítica de las mismas. Para fines de nuestra discusión sobre el caso chileno, bastaría con recordar algunas de sus ideas fuerzas.<sup>2</sup>

El desarrollo se define como desarrollo de los seres humanos y no de las cosas y abarca desde los niveles microlocales, regionales, nacionales y del sistema mundial como un todo. Sus características básicas son: la orientación hacia las necesidades básicas, empezando por la eliminación de la miseria, el carácter endógeno y autodependiente, es decir, generado por las fuerzas internas de la sociedad que lo emprende, en relación armónica con el medio ambiente y basado en transformaciones estructurales. Todos estos elementos están ligados entre sí indisolublemente y no se conciben como elementos aislados destinados a paliar tal o cual vicio de los actuales modelos de desarrollo sino que se postulan como la matriz de un nuevo modelo.

Cuando quiere discutirse la validez de esta nueva matriz para el desarrollo en alguna sociedad concreta, pueden seguirse diversos caminos. Uno es el análisis de los recursos con que cuenta una determinada sociedad y a partir de ellos ver las posibles estrategias alternativas de maximación de tales recursos. Otro es la elaboración de estrategias económicas que compatibilicen las antinomias presentadas por los actuales esquemas de desarrollo, por ejemplo, crecimiento y redistribución.<sup>3</sup> Cualesquiera de estos caminos nos parece no sólo legítimo sino indispensable. Pero en

<sup>2</sup> Entre la ya abundante literatura sobre el tema del otro desarrollo, citemos solamente algunos de los textos que hemos usado como referencia: El *Informe Dag Hammarskjöld 1975, ¿Qué hacer?* (en *Development Dialogue*, Suecia, 1975 Nos. 1 y 2); los trabajos contenidos en la Antología editada por Marc Nerfin *Another Development, Approaches and strategies*, (Publicado por la Fundación Dag Hammarskjöld, Suecia 1977); *Catastrophe or New Society? A Latin American World Model*, de Amílcar Herrera *et al.* (publicado por el International Development Research Centre, Ottawa, Canadá, IDRC.064e); Marshall Wolfe, "Para "otro desarrollo": requisitos y proposiciones" (en *Revista de la CEPAL*, Segundo Semestre 1977).

<sup>3</sup> Ver por ejemplo, el trabajo de Sergio Bitar *Elements of a strategy for another development in Chile*, en Marc Nerfin, *op. cit.*

nuestro caso particular abordaremos el problema desde otro ángulo o nivel: el de las condiciones políticas y de los actores sociales en Chile que juegan en la definición de una estrategia de otro desarrollo. A lo largo de este análisis podrá irse describiendo un cuadro de cuáles características se desplazan a favor o en contra de otro desarrollo. Se trata de una perspectiva necesariamente incompleta y que deja grandes zonas en la oscuridad, entre otras, la de la estrategia económica para otro desarrollo. Sin embargo, tal perspectiva nos parece si no previa, al menos indispensable por razones que se irán exponiendo en lo que sigue.

Dos órdenes de consideración nos llevan a enfocar el problema desde este ángulo. El primero ha sido ya formulado por algunos autores<sup>4</sup> y se refiere, en síntesis, a que si las ideas en torno a otro desarrollo y los procesos de liberación no han prosperado globalmente, en una época en que "la utopía es materialmente posible", ello no se debe a que no se conozcan o no se deseen, sino a que chocan contra intereses plasmados en estructuras de explotación y formas políticas de dominación. De modo que la problemática del otro desarrollo debe necesariamente focalizarse en la cuestión del poder.

Pero esta consideración de orden general debe especificarse en la situación que viven algunas sociedades en América Latina, entre ellas, Chile. No es banal que en ellas, como ha sido señalado, el tema de la democracia haya sucedido —en los foros internacionales, en los círculos especializados, en los medios intelectuales, en los planteamientos de instituciones de influencia espiritual, en las demandas de los organismos sindicales, en las presiones explícitas o implícitas por transformación—, al tema del desarrollo que se enseñoreó de los escenarios en las décadas pasadas. Tampoco es banal que surjan los esquemas alternativos en el plano académico y político en torno a este tema. Y es que estas sociedades viven hoy una crisis que dista mucho de las optimistas visiones de un "paréntesis". Se trata de una crisis de refundación, como intentaremos mostrarlo más adelante. En ellas se intenta establecer un nuevo modelo de desarrollo que busca reorientar la totalidad de la sociedad. Dicho modelo de "funcionamiento" de la sociedad se dobla de un esquema de ordenamiento político-social, es decir, se presenta como un modelo global de sociedad y como un horizonte a conquistar desde arriba. Más allá de los avatares de la coyuntura y de las variaciones posibles en la cúpula política, hay un proyecto de sociedad política correlativa al modelo de desarrollo. En él se inscriben, en forma a veces inconexa, las formulaciones que se plantean como una crítica radical a la democracia, los mesianismos antimarxistas, los llamados a la nueva institucionalidad, la búsqueda de una nueva democracia protegida o restringida, las doctrinas de Seguridad Nacional, etcétera.

Todo ello en una situación en que la incapacidad de generar un régimen político estable, es decir, una relación sólida, codificada y consen-

<sup>4</sup> Cfr. F. H. Cardoso, *Towards another development*, en Marc Nerfin, *op. cit.*

sual entre Estado y sociedad civil, obliga a mantener y consolidar los instrumentos de coerción y de control social. El tema de la democracia, no exento de trampas y de posibles recuperaciones por las fuerzas dominantes, es el tema de las condiciones políticas y sociales que permiten la liberación ante este proyecto de dominación.

Sobre todo esto volveremos más adelante. Queremos por ahora insistir en el carácter de proyecto global de sociedad que los regímenes autoritarios militares intentan implantar, cualquiera sea la alternativa coyuntural de gobierno y el éxito final que alcancen. Se trata de una contrautopía, con una base material o esquema de desarrollo, y con actores sociales que, con contradicciones o no, intentan impulsarlo. Este carácter fundacional de los regímenes en cuestión y su realidad operativa se introducen en todas las esferas de la sociedad y redefinen, en un proceso que se gesta efectivamente desde hace algunos años, estructuras materiales, clases sociales y sus sistemas de articulación y representación, instituciones, mecanismos de socialización y conciencia colectiva.

Si esto es así, plantearse el tema del otro desarrollo en estos contextos es necesariamente plantearse el problema de la liberación de las energías sociales que permitan la negación de la contrautopía en marcha, es decir, es plantearse el problema de las condiciones sociopolíticas y preguntarse por las fuerzas sociales que pueden configurar tal negación.

De modo que no sólo una afirmación de tipo general sino la situación precisa de una sociedad en concreto obliga a replantear la problemática política en torno al tema del otro desarrollo.

Sin embargo, la reformulación sociopolítica del problema no está exenta de riesgos. En efecto, hay una tradición académica o intelectual de la que somos herederos que parece desligar el análisis de la política de lo que es la vida y la práctica cotidiana de los seres cuya vida es el destino final de la política. ¿No sería esta la postulación fundamental subyacente al tema del otro desarrollo, apuntar al desarrollo de los seres humanos más que de las cosas y de las estructuras? Volver a la política ¿no es encerrarse nuevamente en el mundo de las estructuras abstractas mientras la corriente de la vida va por otro lado y mientras las grandes masas parecen no identificar su destino personal con los problemas del poder y del destino global de un territorio políticamente organizado? Esta tensión dramática entre la generalidad de la política y la particularidad de la vida, esta relativa intangencialidad de ambas esferas, debe ser necesariamente recuperada en el análisis de la política, para que él no sea el objeto de una nueva apropiación de la universalidad por parte de un grupo particular, la clase política.

Nuevamente, la introducción de un proyecto de dominación que intenta refundar la sociedad ilustra el problema de manera dramática: no hay nada más cerca y al mismo tiempo más alejado del comportamiento político codificado para clases y grupos sociales que el comportamiento de estos regímenes. Por un lado, las conductas clasistas y los enfrentamientos de intereses parecen salir de los manuales en su transparencia paradigmá-

tica y perfectamente definible. No hay nada más cercano a un análisis sociopolítico convencional en que los individuos son casi pura expresión de clases, grupos y categorías y en que sus relaciones son gobernadas por leyes estructurales. Nada más alejado, sin embargo, cuando se piensa en la opacidad del sistema, en la destrucción de los canales codificados para el comportamiento colectivo y la comunicación, o se toma en serio el tema de la atomización o privatización que introducen estos regímenes. ¿Qué es la atomización o privatización si no la explosión de conciencias, aspiraciones y conductas que desbordan los paradigmas estructurales o clasistas, la captación de la soledad indefinible e insuperable, el predominio de las situaciones límites que obligan en cada momento a la autoconciencia y a las opciones últimas? En estas condiciones el análisis sociopolítico puede al mismo tiempo acertar al corazón del problema, proyectando la utopía y la estrategia, y estar totalmente alejado de la historia y de la vida.

Plantear el tema del otro desarrollo en términos de las condiciones sociopolíticas (estructuras, movimientos y actores) que permitan que el problema pueda empezar a formularse. Drama insuperable del análisis sociopolítico. No han tenido estas líneas otro objetivo que plantear lo que podríamos definir como el estado de ánimo, las sinuosidades del análisis que intentamos y sus límites e inseguridades.

## II. ESQUEMA DEL DESARROLLO SOCIAL CHILENO

Plantearse el tema del otro desarrollo desde esta perspectiva nos lleva a preguntarnos, en primer lugar, cuáles han sido las condiciones sociopolíticas y los actores sociales que posibilitaron el esquema de desarrollo vigente hasta la ruptura en 1973, del régimen político que lo enmarcaba y cuáles son las condiciones y los actores que permiten la introducción de un nuevo esquema de desarrollo a partir de la instauración del gobierno militar, en segundo lugar. Seguidamente nos preguntaremos por las transformaciones introducidas por este esquema de dominación para evaluar desde allí las condiciones sociopolíticas y las fuerzas sociales que permiten plantear el tema del otro desarrollo.

La reformulación del modelo de desarrollo y del esquema político que hacen crisis en las primeras décadas de este siglo, cuyos hitos más significativos son el plano político institucional, la Constitución de 1925 y en el plano económico la crisis de 1929, da origen a lo que se denominó el modelo de desarrollo "hacia adentro" cuyo motor es el proceso de industrialización sustitutiva. En el plano político al denominado Estado de compromiso, en el que orientado por una racionalidad global de desarrollo de un capitalismo dependiente, ninguna clase en particular logra asegurar su hegemonía definitiva sobre las otras, lo que obliga a adoptar una estrategia de transacciones, por un lado y, por otro, a incorporar per-

manentemente nuevos grupos a la vida políticosocial como un modo de asegurar la estabilidad del esquema político institucional. Necesariamente, esto tiene como correlato la inestabilidad del proceso de crecimiento económico.<sup>5</sup>

Lo que interesa resaltar aquí es un doble fenómeno. Por un lado el hecho que la industrialización capitalista se realiza "heterodoxamente", no por efecto del impulso creador de una burguesía innovadora y agresiva que crea un orden económico al que la esfera política debe ajustarse y ordenar, sino que es el Estado el principal actor de la industrialización, al que esa burguesía se asocia y del que extrae sus ventajas. Ello supone la existencia del bloque político social en el que el centro político, representando un conjunto agregado de sectores que pueden clasificarse como capas medias, es capaz de asegurar la estabilidad a través de una política pendular de alianzas, y los sectores populares organizados logran así un espacio para permear la sociedad con sus reivindicaciones de corto y mediano plazo.

El fenómeno anterior hace inteligible otro de suma importancia: el de la relativa correlación entre la industrialización dirigida desde el Estado y un proceso creciente de democratización entendida ésta como la incorporación a la vida político social, y a sus beneficios, de nuevos sectores con capacidad de presión sobre el Estado. Este proceso de democratización sustantiva se realiza, a su vez, en el marco de un sistema político democrático, es decir de reglas formales del juego que permiten un "espacio" en el que los diversos sectores sociales "incorporados" se hacen representar para la competencia por la satisfacción de sus demandas e intereses. Hay entre el proceso de democratización y el sistema político democrático una relación de mutua necesidad en el que uno no puede entenderse sin el otro, a diferencia de otros países de América Latina, donde el proceso de democratización sustantiva se hizo por la vía autoritaria.

Esta correlación entre industrialización sustantiva o modelo de desarrollo hacia adentro, proceso de democratización y sistema político democrático es hoy recuperada a través de dos mitos antagónicos que tienden a oscurecerla y a pintarla en colores blanco y negro. Por un lado, de parte de las fuerzas que sostienen el modelo de sociedad que intenta implantarse a partir del golpe militar de 1973, este triple proceso es visto como la causa principal de la decadencia de la nación y su reversión como estrictamente indispensable para encarar su reconstrucción. Desde este ángulo se enfatiza el aspecto inestable y desequilibrado del crecimiento económico, provocado por la interferencia de elementos redistributivistas y

<sup>5</sup> Al respecto y para no enunciar una larga bibliografía, *cf.* el trabajo ya clásico de Aníbal Pinto "Desarrollo económico y relaciones sociales en Chile" (en A. Pinto, *Tres ensayos sobre Chile y América Latina*. Ediciones Solar, Buenos Aires, Argentina 1971). Las ideas que se exponen a continuación han sido más desarrolladas en M. A. Garretón y T. Moulian, *Procesos y Bloques Políticos en la crisis chilena 1970-1973* (Documento de Trabajo, FLACSO, Santiago, 1977. También en *Revista Mexicana de Sociología* Nº 1, 1979).

participacionistas, donde el Estado —dominado por una clase política atenta a su mantención y reproducción— habría sido utilizado en forma demagógica para proteger una industria ineficiente como para conceder privilegios a diversos grupos sociales descuidando la acumulación y entorpeciendo, para favorecer a diversas categorías sociales, las reglas del juego económico, entiéndase el papel de la libre competencia en todos los mercados. El crecimiento estatal desmedido, la distorsión de los mercados, el ahogamiento de la iniciativa económica creadora, la inflación permanente y la inestabilidad del crecimiento económico habrían sido las causas y consecuencias de una política demagógica y populista, la que llevada a su extremo en el período 1970-1973, habría terminado por destruir no sólo la economía sino las bases institucionales de ese mismo Estado. El juego de los tres procesos señalados es el gran mal original de la sociedad chilena de este siglo comparado con la época de grandeza decimonónica.<sup>6</sup>

Por otro lado, y ante la regresión provocada por el régimen militar de capitalismo dependiente autoritario, surge el mito de la historia rosada de la democracia chilena. Se recalca aquí el aspecto progresivo del proceso de inclusión social y la estabilidad de un régimen político que, a diferencia de otros de América Latina, habían permitido una sólida representación política y un mecanismo de articulación de intereses que lograba la institucionalización de los conflictos y su resolución a partir de diversas fórmulas arbitrales legítimas. Las crisis parciales del sistema o cuellos de botellas del proceso industrializador habrían sido enfrentados por fórmulas de “saltos adelante” a través de los procesos de reformas estructurales. Así, la crisis de la sociedad no se debería al triple juego de los procesos señalados sino precisamente a su interrupción a comienzos de la década del 70 cuando el sistema de equilibrio se habría roto para dar paso a un proyecto de poder totalizador en que el Estado intentaba dirigir la totalidad de los procesos económicos y así controlar el conjunto de la vida político social, desarticulando todo el aspecto económico.<sup>7</sup>

En una variante de la visión nostálgica, hay quienes en oposición a la precedente, ven en el período 70-73 la superación de todas las contradicciones del proceso de desarrollo de las décadas precedentes. En esta visión, el proceso iniciado en esos años permitía eliminar los desequilibrios y distorsiones antipopulares del esquema de desarrollo seguido hasta entonces. Tales desequilibrios y distorsiones iban a ser eliminados por una acentuación del rol del Estado, pero esta vez utilizado contra la “lógica del capital”. Estaríamos en presencia, durante estos tres años, del comienzo de un proceso de “otro desarrollo” —aun cuando nunca fuera formulado así y las bases del proceso industrializador no se cuestionaran,

<sup>6</sup> Ver, por ejemplo, Sergio de Castro, *Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública*. (Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, Enero de 1978).

<sup>7</sup> Un ejemplo de este tipo de análisis en J. B. Luco, “Tendencias históricas de la sociedad chilena durante el período de vigencia de la Constitución Política de 1925”. (En Revista *Mensaje*, Santiago, Junio 1976).

sino sólo su dirección y efectos en que la democracia pasaba así de lo formal a lo real.

Estas visiones ideológicas comparten un supuesto ideológico: el de la congelación de la historia. Sea que la historia del país se inicie en 1973, sea que ella se haya interrumpido en 1970, o sea que su culminación se realiza entre los años 70-73, en todos estos casos las dimensiones de continuidad y ruptura aparecen distorsionadas. Tales concepciones no tendrían mayor interés fuera del campo del análisis de las construcciones sociales de la realidad, si no fuera por los efectos prácticos que ellas tienen en la formulación de proyectos del futuro donde lo que se hace es reproducir en forma "purificada" la época que en cada caso se exalta. Volver a la democracia conocida hasta el 70 corrigiendo sus "excesos" sin cuestionarse el esquema de desarrollo. Llevar a cabo hasta su lógica última lo que no pudo hacerse por falta de "poder" entre el 70-73. Recrear el país a partir de la mantención —por la vía necesariamente autoritaria— de la pauta instaurada en 1973. Tres esquemas de futuro que arrancan de una visión que apropia la historia para aquella clase o actor social que la dirigió, y que, aunque estereotipados o caricaturales, no dejan de operar en la conciencia de diversos actores sociales.

Más allá de las visiones míticas, vale la pena insistir que la triple correlación señalada entre proceso de industrialización sustitutiva o desarrollo "hacia adentro", democratización sustantiva y proceso político democrático, si bien efectiva, es contradictoria y conflictiva y está muy lejos de ser una historia rosada. En efecto, no se trata sólo de su aspecto dependiente e inestable en cuanto al flujo de crecimiento económico y a su tendencia al estancamiento en el largo plazo. Aludimos aquí a que el compromiso de diversos sectores sociales en torno al esquema de desarrollo y al sistema político paga el precio de una exclusión social fundamental de tipo estructural. Se trata del campesinado y de los sectores marginales urbanos, cuya tardía incorporación, hacia la década del 60, es siempre precaria y dependiente en parte de la organización articulada desde el Estado, aun cuando haya crecientes grados de autonomía.

Pero además de esta exclusión de tipo estructural, hay otra que afecta a la representación política de los sectores populares y que consiste en la exclusión y represión a partidos en determinados períodos y también en el recurso a la violencia estatal en situaciones en que la presión popular se hace especialmente grave para la mantención del sistema. En todo caso, lo que prima en el largo período que culmina en 1970 es un conjunto de mecanismos arbitrales consensuales que marginaliza e inserta precariamente en el juego democratizador a vastos sectores sociales.

De modo que la correlación entre los tres procesos descritos es contradictoria, conflictiva y necesariamente ambivalente. Entre democratización "sustantiva" o proceso de incorporación social y proceso político democrático hay una relación de mutua indispensabilidad e inteligibilidad; una tendencia positiva, en que uno y otro se abastecen recíprocamente de legitimidad, pero mediatizada tal relación por un esquema de des-

arrollo industrializador que si bien la hace en principio "compatible", le fija marcos y límites que la lógica final del capital tiende a hacer cada vez más estrechos y a fijarle un obstáculo insalvable hacia fines de la década del 60. El período que va del 64 al 70 puede definirse como el último esfuerzo de mantener este triple juego, como un intento de "salto adelante" manteniendo la lógica del sistema, pero profundizando la industrialización, expandiendo mercados internos y externos y eliminando las exclusiones estructurales a través de procesos de reforma agraria y de incorporación de los sectores marginales rurales y urbanos. Pero para ello fue necesario agudizar las tendencias concentradoras y dependientes del modelo de desarrollo, en un clima de creciente movilización popular.<sup>8</sup>

El esquema del triple juego industrialización, democratización progresiva pero contradictoria y conflictiva, y régimen político democrático, reposó tanto en el rol asumido al Estado como en un determinado bloque social. Respecto al rol del Estado, este fue activado tanto por las exigencias propias del esquema de industrialización como por las demandas de políticas sociales ejercidas sobre él. El Estado aparecía entonces como el campo principal de las alianzas de grupos y clases, y el acceso a él como una necesidad determinante para obtener satisfacción de demandas y reivindicaciones. Por otro lado, ello refuerza la necesidad de establecer a nivel del aparato estatal toda una suerte de mecanismos y trabas, para impedir el predominio definitivo de un grupo o sector sobre los otros que integran el compromiso. Campo de alianzas, instrumento de satisfacción de las demandas de incorporación, obstáculo parcial al desarrollo del proyecto autónomo de transformación por parte de los sectores populares. Ni dominio irrestricto y exclusivo de una clase ni objeto neutral de disputa por encima de las clases, la lógica de dominación del Estado era contradictoria y doble: asegurar y reproducir la legitimidad integrando nuevos sectores, pero mantener la primacía de los intereses capitalistas; extender la participación pero mantener su subordinación a los intereses predominantes y, por lo tanto, jugar con la exclusión y el carácter subalterno de tal participación.

Tras este proceso subyacían sin duda los intereses de los sectores industriales ligados, en el caso chileno, a los financieros, comerciales y agrarios, y donde la importancia de estos últimos fue determinante en la mantención de la pauta de exclusión de los sectores campesinos. Pero es evidente que en gran parte este proceso expresa los intereses de una amplia gama de "sectores medios" para los cuales la expansión del poder económico estatal es una garantía de su consolidación y reproducción. Ello se halla necesariamente vinculado a la capacidad de representación

<sup>8</sup> Sobre el período 1964-1970, véanse, entre otros, Sergio Molina, *El proceso de cambio en Chile. La experiencia 1965-1970* (Santiago, Ed. Universitaria, 1972); Ricardo French-Davis, *Políticas económicas en Chile 1952-1970* (Santiago, Ed. Nueva Universidad, 1973); en una perspectiva más crítica: Barbara Stallings, *Economic development and class conflict in Chile 1958-1973*. (Tesis doctoral. Stanford University, 1975).

política que adquieren estos sectores a través de los partidos de centro y a la posibilidad de alianzas de éstos tanto con los sectores económicos predominantes como con los sectores populares. El sistema político aparece así como un objeto privilegiado de identificación y lealtad de los sectores medios, no por una profesión de fe democrática o por una adhesión valorativa visceral, como sostienen ciertos mitos de la "clase media democrática", sino por cuanto él aparece como un instrumento fundamental de su constitución, reproducción y movilidad. También es cierto, que hay incorporados en este proceso, aunque en forma subordinada, intereses de sectores populares.<sup>9</sup> La relación de éstos con el Estado y el conjunto del sistema político es necesariamente ambivalente. Por un lado, la búsqueda de integración e incorporación que permita consolidar la identidad nacional con la identidad ciudadana y con las de sujeto político capaz de participar, demandar y satisfacer tales demandas; es decir, la ampliación de la legitimidad del Estado y el sistema político. Pero en la medida que tal incorporación es parcial, segmentaria y necesariamente subordinada, se perfila un proyecto progresivamente autónomo que se plantea como alternativa a la lógica última representada por el Estado.

Los rasgos estructurales señalados tienen algunos efectos importantes, que a su vez los acentúan, en la estructura de clases y el proceso de incorporación de éstas, el aparato institucional, el sistema organizacional, los mecanismos de articulación y representación y la conciencia ideológica de los diversos actores sociales.

En cuanto a la estructura de clases,<sup>10</sup> el mismo esquema de desarrollo desequilibrado y contradictorio, el peso del Estado, los rasgos de estructura preexistentes y el impacto que en ellos produce una modernización relativa, introducen un esquema sumamente diversificado y no reductible al clásico eje central burguesía-proletariado. Como bien han recalcado algunos,<sup>11</sup> tomar en serio los análisis de la dependencia obliga a sacar sus consecuencias para el análisis de clases, donde la diversidad de principios de acumulación introduce una compleja rearticulación. No es que el eje clásico no exista, sino que a él se agregan otros ejes que se combinan y entrelazan. Ello es válido en los diferentes niveles, donde, por ejemplo, el conjunto denominado sectores medios aparece como una agregación de

<sup>9</sup> Sobre el papel de los sectores populares en el proceso de industrialización, véase Enzo Faletto, *Clases, crisis política y el problema del socialismo en Chile* (FLACSO-ELAS, Santiago, mimeo 1973); E. Faletto y E. Ruiz, *Génesis histórica del proceso político chileno* (Santiago, Edit. Quimantú 1971); L. Castillo, *Capitalismo e industrialización: su incidencia en los grupos obreros en Chile* (Cuadernos de la Realidad Nacional, Santiago, Junio 1971).

<sup>10</sup> Sobre estructura de clases en Chile, ver de Manuel Castells, *La estructura de clases en Chile* (CIDU, Santiago, Septiembre de 1972. Documento de Trabajo N° 55) y de Emilio de Ipola *et al.*, *Teoría y método para el estudio de la estructura de clases sociales (Con un análisis concreto: Chile 1970)*. (Documento de Trabajo ELAS-CELADE, Santiago, julio 1976).

<sup>11</sup> Cfr. Alain Touraine, *Les Sociétés dépendantes* (Sociologie Nouvelle, Ed. Duculot, Bélgica).

posiciones e intereses extremadamente heterogéneos cuyos únicos denominadores comunes parecen ser la relación con el Estado y el elemento ideológico, sobre lo que volveremos más adelante. En efecto, al interior de estos sectores medios hay algunos que se ven claramente favorecidos por el esquema de desarrollo al coincidir sus intereses con la expansión de los grupos monopolistas (sobre todo en ciertas profesiones y servicios), mientras los hay que se ven ahogados, constreñidos y amenazados por dicho patrón.<sup>12</sup> Pero tal diversificación es notoria también en los sectores populares, donde la incorporación al aparato productivo dista de ser estable y homogénea y donde, por ello, los conflictos sectoriales o ligados al habitat, la salud, la educación y todas las complejidades del acceso a la vida moderna se superponen a los determinados por la relación como integrantes del sistema industrial.<sup>13</sup> En el campo, la escasa difusión de los procesos de modernización hasta 1965 y su intensificación y aceleración con la reforma agraria a partir de esa época, introducen también cambios y diversificaciones sustanciales.<sup>14</sup> Todo ello, además de los efectos en el plano de la conciencia que veremos más adelante, le da a la incorporación al proceso social y a las vinculaciones con el Estado, un carácter segmentario y clientelístico en que la capacidad de presión y organización adquieren un rol privilegiado e introducen o reproducen a su vez nuevas diversificaciones y distancias al interior de los grandes sectores.

Obviamente, el sistema institucional responde a estas características y se presenta entonces como un conjunto de mecanismos que impiden el sobrepeso excesivo que pueden adquirir los nuevos sectores incorporados y donde el rasgo principal es la agregación o sobreposición de normas que sancionan las nuevas incorporaciones y los precios que se pagan por ella, pero que aseguran que el sistema no pueda ser transformado globalmente y que los contraproyectos sociales deban pactar y conceder, renunciando a constituirse en alternativas al conjunto del sistema de dominación.

La dependencia del Estado para acceder a los diversos niveles y beneficios de la vida social y el tipo de incorporación descrito privilegian la organización y mediación políticas, pero al mismo tiempo afectan al desarrollo de organizaciones sociales autónomas con fortaleza propia. Tal debilidad del aparato organizacional autónomo —que oscila entre el corporatismo más estrecho o la extrema politización no es producto del designio de una clase política que lo manipula a su antojo, sino más bien un efecto del desarrollo estructural descrito, acentuado por las percepciones y expectativas que van surgiendo en torno a él. El caso de las organizaciones estudiantiles es un ejemplo de esta debilidad organizacional.

<sup>12</sup> Un análisis reciente, aunque en una perspectiva diferente, sobre los sectores medios chilenos, en Carlos Emilio Weber, "La perpleja clase media chilena" (Revista *Mensaje*, marzo-abril, 1978). Datos estructurales en Ipola *et al. op. cit.*

<sup>13</sup> *Cfr. Ipola et al. op. cit.* y Castells *op. cit.*

<sup>14</sup> *Cfr. CIDA: Tenencia de la Tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrícola*, Santiago, 1966; J. Echenique, S. Gómez y E. Klein, *Carácter de la agricultura chilena*, (ICRA, Santiago, 1972); Ipola *et al., op. cit.*

En el caso del sindicalismo industrial, en cambio, sus complejas vinculaciones con el sistema político, lograron preservar un ámbito de autonomía y capacidad de autogestión.<sup>15</sup>

Todo lo anterior tiene necesarias repercusiones en el ámbito de los mecanismos de articulación y representación de intereses en el que el conjunto del sistema político partidario aparece también con una connotación ambivalente. Por un lado, se presenta como un vehículo eficaz de la demanda de los diversos sectores sociales incorporados, es decir, los partidos tienden a expresar efectivamente intereses y aspiraciones sociales, lo que explica las transformaciones del espectro político partidista. Por otro lado, el sistema partidario tiende a reproducir ciertos problemas de la sociedad, principalmente el privilegio a los sectores con mayores capacidades de organización y presión, la clientelización a niveles regionales y de representación local, la dependencia respecto a él de las organizaciones locales, funcionales o corporativas con la tendencia a la sustitución de éstas y su relativa manipulación, la consolidación de una clase política que tiende a autonomizarse de su base de representación, la fetichización del interés partidario y su tendencia a la identificación con el interés general; todo lo cual tiende, por un lado, a rigidizar los aparatos en las últimas décadas y a dificultar la generación de proyectos de sociedad de alcance nacional, por otro lado. Ello dice relación a su vez con la consolidación de un esquema tripolar en que los partidos de derecha son capaces de unificarse y penetrar en los sectores medios, el centro político pierde su tradicional capacidad de alianzas en aras de un proyecto autónomo alternativista y los partidos populares experimentan dificultades en la ruptura de su aislamiento, el que es en parte precio de la unidad conquistada en el último tiempo.<sup>16</sup>

En este rápido panorama resaltan dos notas en el plano de la conciencia y la ideología de los sectores sociales. En primer lugar, la difusión de la ideología de "clase media" a amplias capas de los sectores populares más incorporados, por lo que la conciencia de éstos refleja una combinación de elementos propiamente clasistas con valores de promoción individual y grupal. En segundo lugar, y ligado a ello, el valor principalmente instrumental que parece asignársele al sistema político visto como un mecanismo

<sup>15</sup> Ver al respecto Alan Angell, *Partidos Políticos y movimiento obrero en Chile* (México, Ed. ERA 1974), Jorge Barriá, *Historia de la CUT* (Santiago, PLA, 1971) y *El movimiento obrero en Chile* (Santiago, Ediciones UTE, 1971); Marcela Noé, "La Central Unica de Trabajadores: orientaciones de su acción histórica". (*Cuadernos de la Realidad Nacional*, Santiago, N° 8, junio de 1971); Crisóstomo Pizarro, "El rol de los sindicatos en Chile" (en *Ensayos*, Vol. 1, Santiago, 1978).

<sup>16</sup> Aludimos aquí a la fusión en el Partido Nacional de los partidos Liberal y Conservador hacia mediados de la década del 60, en la Derecha, al reemplazo del Partido Radical por el Partido Demócrata Cristiano como partido fundamental del centro político y a la alianza entre el Partido Comunista —Partido Socialista desde 1957 y que tiene su expresión hasta avanzada la década del 60 en el Frente de Acción Popular, FRAP. Para un análisis más detallado de estos bloques políticos, ver *Procesos y Bloques políticos... op. cit.*

competitivo de satisfacción de intereses. Hay aquí una de las vertientes para explicar la paradoja de un sistema democrático aparentemente sólido. Desde la perspectiva de los sectores dominantes y la derecha política esta adhesión es fundamentalmente adoptiva —están “obligados” a jugar al juego democrático— y se pierde cuando el sistema tiende a desplazarlos y el discurso autoritario empieza a hacerse predominante. Su astucia consistirá en permear la adhesión de los sectores medios que aparecían identificados con el sistema político y a los cuales obligará a plegarse al proyecto autoritario. Desde el punto de vista de los sectores populares, sus organizaciones clasistas y políticas son un pilar fundamental en la construcción y estabilidad del sistema político, pero la presencia de éste como un dato de la realidad y las dificultades y trabas que pone al desarrollo de su proyecto autónomo alternativo, irán enfatizando el elemento crítico y la necesidad de su superación con lo que el discurso aparecerá ante la percepción manipulada de los sectores medios como el de la amenaza e inevitabilidad de su destrucción.<sup>17</sup>

Vale la pena a estas alturas ilustrar el carácter contradictorio del proceso de democratización y su tendencia mesocrática, con dos ejemplos bastantes diferentes pero que permitirán luego la comparación con el proyecto histórico que intenta hoy implantarse en la sociedad chilena.

Al primero ya hemos aludido, y es que el proceso de democratización o incorporación se hace al precio de la exclusión del campesinado y de la mantención de las pautas tradicionales de explotación en el sector rural. La vinculación al sistema político de estos sectores es como masa electoral clientelística de los intereses de los grandes propietarios agrícolas. Hasta 1964 no existen significativamente organizaciones campesinas autónomas debido a las dificultades de sindicalización. Es sólo a mediados de la década del 60 que la mantención del sistema de dominación global obliga a pagar el precio de la modernización agraria, la reforma del latifundio y la incorporación nacional del campesinado. Cabe destacar, en términos de lo que hemos venido señalando, dos rasgos típicos de esta incorporación. Por un lado, es inducida por el Estado y si bien el movimiento campesino logra estructurar organizaciones autónomas, ellas mantienen siempre, aunque más no sea a nivel del financiamiento, una relativa dependencia del Estado, lo que se acentúa en el caso de las nuevas formas de propiedad que se crean.<sup>18</sup> Por otro lado, a nivel del Estado este proceso de trans-

<sup>17</sup> Sobre las relaciones entre movimiento popular y régimen democrático en Chile, ver Renzo Falién, “Los problemas de la democracia y los sectores populares” y Tomás Mouletto, “Democracia, socialismo y proyecto nacional popular” (en *Futura institucionalidad de la paz en Chile*. CISEC, Santiago, septiembre de 1977).

<sup>18</sup> Sobre las transformaciones ocurridas a propósito de la reforma agraria entre 1965 y 1970, ver, entre otros, de Varios autores, *Reforma Agraria Chilena. Seis ensayos de interpretación* (ICIRA, Santiago 1970) Solón Barraclough, *Reforma agraria, historia y perspectiva* (en *Cuadernos de la Realidad Nacional*, Santiago, marzo de 1971). Respecto al movimiento y organizaciones campesinas, Almino Affonso y otros, *Movimiento Campesino Chileno* (Santiago, ICIRA, 1970) y Sergio

formación agraria no significó la correlativa transformación del aparato estatal a este respecto, sino que implicó la mantención de la pauta de crecimiento por agregación. Cada sector agrícola que se iba incorporando encontraba su propio organismo estatal de atención, lo que tuvo necesarios efectos en la clientelización del campesinado, la atomización del aparato estatal con la consecuente imposibilidad de planificación agrícola y, sobre todo, en la segmentación ideológico-política de la burocracia encargada del sector. Lo importante a retener es que las consecuencias de este fenómeno afectaron, aunque en calidad diferente según el grado de intensidad de las transformaciones agrarias, tanto al gobierno de derecha que impulsó una incipiente y tímida reforma a comienzos de la década del 60, como al gobierno de centro entre 1964-1970, como el gobierno de izquierda entre 1970-1973.<sup>19</sup>

El segundo ejemplo dice relación con el fenómeno de apropiación por parte de los sectores medios de los procesos de transformación social que en sus inicios buscan cambios más radicales y la adaptación de tales transformaciones a sus intereses. Se trata de los procesos de reforma universitaria iniciados entre 1967 y 1968.<sup>20</sup> Ellos obedecen a fenómenos estructurales relacionados con la modernización y la necesidad de vincular a la Universidad a ella y son impulsados por el movimiento estudiantil cuya ideología consagra como principios fundamentales la democratización de la Universidad, la modernización científica y pedagógica, la democratización de las estructuras de poder y dirección y, sobre todo, la Universidad "conciencia crítica de la nación" y "comprometida" con el pueblo. En el hecho, y sin negar las importantes transformaciones ocurridas, la expansión y modernización universitarias y la democratización de su estructura de dirección consagraron un nuevo modelo de universidad, relativamente distinto al que predominaba antes de la reforma. La Universidad se convirtió en un campo de consolidación y reproducción de ciertos sectores superiores de las capas medias. No sólo mediante la expansión de vacantes a los egresados de la educación media, lo que en Chile ya es un proceso de selección social, sino principalmente en cuanto ella se convirtió en un mercado ocupacional capaz de dar estabilidad económica, status social y diferenciación cultural respecto a otros sectores de capas medias. Sobre esta base, el proyecto de universidad de capas medias reconoce dos momentos. En el primero, la universidad se convierte en sí misma en el objeto del proyecto, básicamente con la creación de una

Gómez, *La organización campesina y la reforma agraria en Chile, 1965-1977* (FLACSO, Santiago, mimeo, mayo 1978).

<sup>19</sup> Sobre los problemas de organización del Estado en el agro, en el período 64-70, Plinio Sampaio, *Algunos problemas administrativos de la Reforma Agraria* (Santiago, ICIRA, s/f) y M. A. Garretón, *Burocracia y cambio social* (mimeo, ICIRA, 1967).

<sup>20</sup> Un análisis más detallado en M. A. Garretón, *Universidad y política en los procesos de transformación y reversión en Chile 1967-1977*. Ver también Edmundo Fuenzalida, "Problemas de ciencia y tecnología en el paso al desarrollo" (en *Mensaje*, Santiago, septiembre-octubre, 1971).

democracia universitaria que busca reproducir en la universidad el sistema político social, la expansión orientada a sus propios hijos y la reivindicación de la autonomía presupuestaria. Pero en un segundo momento, cuando se generan condiciones sociales de polarización política, el proyecto universitario se articula a nivel de la sociedad, por un lado, en términos corporativos con los Colegios Profesionales que cierran el ciclo de monopolización social de la educación iniciado en la educación media y profundizado por la Universidad; por otro lado, con los partidos políticos que aglutinan a las capas medias radicalizadas que han perdido su identificación con el sistema político democrático. Así, la Universidad como un todo es arrastrada al proceso político y se ubica en las posiciones que en éste adoptaron las principales organizaciones corporativas y políticas de las capas medias. Por otro lado, en este proceso, el movimiento estudiantil pierde su autonomía y desaparece en su especificidad subsumiéndose en el esquema de partidos políticos. Es evidente que en la reforma universitaria subyacían principios de dinamización universalizables que de no haber sido particularizados por la base social de la Universidad habrían necesariamente llevado a su transformación profunda. La identificación entre esos principios que trascienden determinados grupos sociales y los intereses de determinados grupos que los redefinen en términos de tales intereses despojándolos de su dinámica trascendente, ilustrada en este caso en el fenómeno de la educación, ha sido una pauta recurrente del desarrollo social chileno.

De lo dicho hasta aquí no es difícil volver a insistir en el carácter contradictorio, desigual y ambivalente de la tendencia positiva del llamado proceso de democratización y su correlación con el patrón de desarrollo y el sistema político. No es tampoco sorprendente ver junto a la sobreinstitucionalización y estabilidad de la estructura política, sus tendencias a la desinstitucionalización y sus debilidades en la estructura económica y social.

Todo ello se hace evidente hacia fines de la década del 60, donde agotado el último esfuerzo para una modernización y salto adelante del patrón de desarrollo capitalista dependiente, las tendencias concentradoras y excluyentes de ésta se hacen incapaces de asegurar la mantención del proceso de democratización.<sup>21</sup> A estas alturas, se hace visible la inca-

<sup>21</sup> El análisis del período 1970-1973 está basado en diversos textos publicados por el autor, donde se cita la bibliografía respectiva. Especialmente "Continuidad y ruptura y vacío teórico-ideológico: dos hipótesis sobre el proceso político chileno 1970-1973" (en *Revista Mexicana de Sociología*, N° 4/77) y "1970-1973. Sentido y derrota de un proyecto popular" (en *Revista Mensaje*, enero/febrero, 1978). También el trabajo con Tomás Moulian, *Procesos y Bloques políticos... op. cit.* Una bibliografía completa sobre el período, en M.A. Garretón y E. Hola, *Bibliografía del proceso chileno 1970-1973* (FLACSO, Santiago, mimeo, junio 1978). La investigación, dirigida por el autor, que incluye estos y otros trabajos ha sido parcialmente editada en dos informes, *Ideología y Procesos Sociales en la Sociedad Chilena 1970-1973* (4 vols., mimeo, 1976 y 1977. FLACSO). La edición final, en el curso de 1979.

pacidad de los sectores políticos predominantes de definir un proyecto de carácter nacional. La alternativa histórica que aparece es o la estabilización y profundización del esquema de desarrollo capitalista dependiente pero revirtiendo el proceso de democratización, o la profundización de éste pero alterando drásticamente el patrón de desarrollo económico y el carácter mesocrático del desarrollo social. Para los sectores predominantes de la economía, en los cuales prima la convicción generalizada que el proceso de democratización amenaza la supervivencia del conjunto del sistema, la primera alternativa se les plantea en forma urgente. Ella es incapaz de presentarse como nacional en la medida que se liga a la defensa de privilegios e intereses de sectores minoritarios que han perdido legitimidad a raíz tanto del proceso de democratización como de los fenómenos de racionalización y radicalización ideológica que lo acompañan. Asimismo, esta alternativa, en la medida que debe operar por exclusión de sectores incorporados o con expectativas de ello, no puede hacerse sin recurso a un sistema represivo, es decir, sin ruptura de la legalidad política democrática. Ahora bien, si es cierto que hacia fines de los sesenta se asiste a una crisis nacional caracterizada por el agotamiento del esquema de compromiso para asegurar la dirección estatal y la incapacidad del patrón de desarrollo para asegurar la continuidad y profundización del proceso de democratización, tal crisis no afecta a la legitimidad del sistema político democrático que se mantenía vigente y, por lo tanto, hacía inviable en ese entonces esta alternativa. No es extraño, así, que una vez destruida esta legitimidad y hecho estallar el sistema político en septiembre de 1973, se asista desde ese momento al pleno desarrollo y vigencia de la alternativa mencionada. Por su parte, el centro político, impulsor de importantes reformas estructurales es de algún modo víctima de ellas dada su incapacidad de consolidar una alianza que impulsara una u otra alternativa. Su incapacidad de proponer un proyecto nacional proviene de su aislamiento tanto respecto de los sectores capitalistas en su conjunto con los que ha introducido una contradicción a través de la reforma agraria y su potencialidad, como de los sectores populares expresados en los partidos de izquierda debido al carácter parcial de las reformas impulsadas y consolidador en definitiva del sistema de dominación pese a las contradicciones y dinámicas introducidas.

La única alternativa que puede postularse como proyecto nacional es la que hemos descrito como el intento de profundizar el proceso de democratización revirtiendo su base material, es decir, el esquema de desarrollo. Este es el proyecto histórico que encarnan los partidos de la Unidad Popular. De algún modo él establece una doble relación con el sistema vigente. De continuidad, en términos del esquema político y de la intensificación de la democratización extendiéndola a nuevas esferas y sectores de la vida social. De ruptura en términos del patrón de desarrollo

capitalista dependiente.<sup>22</sup> Tal proyecto puede conceptualizarse como “democratización no capitalista”.<sup>23</sup>

No cabe aquí un recuento ni un análisis en profundidad de lo que fue el proceso sociopolítico desarrollado entre los años 1970-1973. Sin embargo, es necesario referirse, al menos, a ciertos elementos que son pertinentes al interés general de estas páginas.

A este respecto, vale la pena señalar la diferencia entre lo que aparece como un proyecto histórico encarnado por determinados actores sociales y políticos y el modo cómo esos lo viven, lo perciben, lo formulan. Sin detenerse en una discusión teórica de este problema, insistamos en el papel que juega un determinado clima ideológico en esta tensión entre proyecto histórico y formulación del mismo. En efecto, la situación chilena hacia fines de los sesenta es tributaria del clima ideológico latinoamericano donde el ejemplo de la Revolución cubana y el empantanamiento del reformismo llevan a la constatación de la inviabilidad del capitalismo y a una formulación de las alternativas históricas en términos de “socialismo o fascismo”. Coinciden aquí fenómenos de radicalización popular y de pequeña burguesía intelectual producidos por la dinámica implícita de las reformas, con la acumulación de los análisis críticos del desarrollo latinoamericano y chileno que pasan con cierta facilidad del campo estructural a la propuesta política sin las mediaciones necesarias. Ello en el caso chileno se combina con la tradición del patrimonio doctrinario socialista de las organizaciones políticas del movimiento popular, que juega un rol ambivalente en la formulación del proyecto político de la Unidad Popular en la medida que por un lado viabiliza la alianza política de sus dos principales partidos y, por otro, dificulta la comprensión del carácter particular del proceso chileno y de algún modo lo “deduce” de las “leyes generales de la revolución”. Todo ello, lleva a la izquierda chilena a formular el proceso de “democratización no capitalista”, como proceso de construcción o transición al socialismo. No se trata de una cuestión puramente somática. La importancia de este problema teórico-ideológico es doble. Por un lado, la dificultad de comprensión de diversos fenómenos, entre los que se cuentan la diversificación del movimiento popular cuya

<sup>22</sup> Recordemos que, a grandes rasgos, el proyecto económico de la Unidad Popular incluía la nacionalización de las riquezas básicas, la eliminación del monopolio y del latifundio constituyendo una importante área estatal de la economía que generara y transfiriera excedentes y reorientara la estrategia de desarrollo hacia la satisfacción de las necesidades populares. En el corto plazo, las dos metas centrales eran la reactivación económica y la redistribución de ingresos, ésta en beneficios de los sectores de menores recursos. Nos remitimos sobre esto, al estudio de Stefan de Vylder, *Chile 1970-1973. The political economy of the rise fall of the United Popular* (Suecia, 1974) y al trabajo de Humberto Vega, realizado para la investigación *Ideología y Procesos Sociales en la Sociedad Chilena 1970-1973*, “La política económica de la Unidad Popular: una evaluación retrospectiva.” (Santiago, marzo 1978, inédito).

<sup>23</sup> La discusión preliminar de este concepto, en M. A. Garretón, *Continuidad y ruptura...*, op. cit.

amplia gama no se puede confundir con su núcleo de proletariado urbano y minero, la relevancia de los elementos culturales e ideológicos en el comportamiento de los sectores medios permeado y manipulado por la ideología dominante y no reductible a los estímulos de mejoramiento económico, el carácter de las Fuerzas Armadas y los rasgos particulares de una institucionalidad minuciosamente construida para impedir un cambio no gradual o sustancial del sistema. Al mismo tiempo tales dificultades otorgan a la estrategia de estatización económica un rol casi mítico donde todas las contradicciones ideológicas aparentan esfumarse en la ilusión de una homogeneidad de perspectiva, y a la pertenencia partidaria un rol de sustituto de la coherencia y claridad teórica sobre el proceso. Por otro lado, hay aquí un elemento de reproducción del aislamiento popular y sus expresiones políticas, relativamente incapaces de dar cuenta de los intereses y valores de grandes sectores fuera de sus fronteras y que son recuperados por la estrategia de oposición al proceso de transformaciones dirigido por la Unidad Popular.

En efecto, sería absolutamente erróneo pensar que sólo las dificultades internas al proyecto de la Unidad Popular están en el origen de su violenta interrupción en 1973. Ellas actúan sí como factor coadyuvante. Desde el inicio del proceso sectores predominantes de la economía y la derecha chilena comprenden que un proyecto de democratización no capitalista, dirigido por los partidos representativos de vastos sectores populares y cualquiera fuera la formulación que se le diera, era incompatible con su consolidación y su reproducción como sectores dominantes. Ello también es entendido por los sectores dirigentes de los Estados Unidos; potencia hegemónica que ve en la experiencia de la Unidad Popular tanto un serio riesgo de efecto demostración para su tradicional zona de influencia que es América Latina, como una contradicción con intereses de grupos económicos de relevancia e influencia significativas en ese país.<sup>24</sup> De modo que desde el inicio del gobierno de Allende se establece una estrategia de eliminación o derrocamiento que choca con la legitimidad tanto del sistema político como de la necesidad de transformaciones, legitimidad que penetra al centro político que intentaba inicialmente una estrategia de neutralización del programa de gobierno para preservar los intereses políticos de un proyecto autónomo que se ve como alternativa de poder, y que penetra también a las fuerzas armadas. Así para predominar la estrategia de eliminación por sobre la estrategia de neutralización, se hace necesario reconstituir la unidad del bloque opositor afectada por las reformas del gobierno demócratacristiano y, sobre todo, destruir la legitimidad del sistema político ante los "sectores medios" que se identificaban con él —arrastrando así al partido político que los expresaba— y ante las fuerzas armadas. Para ello se recurrirá a procesos de polarización y desinstitucionalización de la lucha política, en los cuales la estra-

<sup>24</sup> Ver al respecto, Richard Fagen, *The United States and Chile: roots and branches*. (Foreign Affaire, enero 1975).

tegia de estatización económica de la UP, sin contar con la mayoría institucional, jugará un rol coadyuvante.

El intento de superación de la crisis de la sociedad chilena hacia fines de los sesenta, tuvo profundas implicaciones en la configuración de los actores sociales y políticos y en la emergencia de rasgos particulares de ellos.

En primer lugar, él confirma la inmensa vulnerabilidad del país en términos de las estrategias del centro hegemónico internacional en cuya esfera se mueve. El tipo de intervención norteamericana pone a prueba y confirma una de las afirmaciones básicas de los enfoques de la dependencia, cual es que ella constituye un marco en el cual se desarrollan dialécticamente procesos sociales con cierta autonomía. Esto es, agotado y dificultado un tipo de intervención al estilo República Dominicana, ella se sustituye por la estrategia de "desestabilización", para lo cual se aprovechan y fomentan condiciones internas que permitan el derrocamiento del gobierno y se manipulan ciertas palancas que aislan y estrangulan la economía del país.<sup>25</sup>

En segundo lugar, el proceso de esos años, pone en evidencia el carácter estrictamente adaptativo instrumental de la adhesión de la derecha y los sectores dominantes de la economía al sistema democrático. Obligada a jugar un juego político y a entrar en permanentes concesiones para mantener sus posiciones y asegurar, a costa de su liderazgo político, la racionalidad general del sistema cuando ésta es puesta a prueba y se amenaza su subsistencia, la máscara democrática cede paso a un discurso autoritario y a una estrategia que apuntan fundamentalmente a destruir la legitimidad del sistema. No es extraño que estos sectores se funden en el régimen militar que sucede al gobierno de la UP y renuncien a instrumentos políticos autónomos en áreas de la dominación militar a cambio de la garantía de preservación de sus intereses como clase.

En tercer lugar, una importante transformación parece producirse en el vasto conjunto de sectores medios, siendo quizás lo más importante la pérdida de identificación con el sistema político. Si esto era a su vez uno de los principios de identidad, es evidente que su quiebre implica una redefinición de su papel objetivo y un cambio en sus niveles de conciencia, en los que la anomía o el apego a fórmulas autoritarias pueden aparecer como las respuestas más recurrentes a esta crisis. En estas pérdidas de la lealtad con el sistema político, hay presentes al menos dos factores. Por un lado, la capacidad manipuladora de los grupos dominantes, en términos de ciertos símbolos e ideas fuerzas ancladas profundamente en los sectores medios y que junto a su lealtad al sistema político parecían

<sup>25</sup> Sobre la intervención norteamericana contra el gobierno de Allende, véase Armando Uribe, *El libro negro de la intervención norteamericana en Chile*. (Siglo XXI, México 1974) y el Informe del Senado Norteamericano, *Covert Action in Chile 1963-1973. Staff report of the Select Committee to study governmental operations with respect to the intelligence activities*. (Washington, 1975). Una extensa bibliografía al respecto en M. A. Garretón y E. Holo, *op. cit.*

ser los únicos factores homogeneizantes en su extrema diversidad. Los conceptos de orden, tranquilidad y estabilidad, el terror traumático a la pauperización y la necesidad de marcar distancias culturales con el mundo proletario, etcétera, constituyen algunos de estos razgos ideológicos básicos. Pero a ello debe agregarse la incapacidad de la Unidad Popular de definirlos en este nivel y el sesgo economicista con que enfrentó su relación con ellos aumentando sin duda sus beneficios económicos, pero sin darles un "espacio" en su proyecto ideológico, con lo que reforzó la percepción de amenaza a su subsistencia y a las conquistas obtenidas a través del sistema político. Los llamados al orden, a la libertad y a la democracia escondían un profundo y paralelo proceso de desquiciamiento y fascistización de estos grupos que acudieron a organizaciones gremiales hasta entonces sin significación política crucial en el desarrollo social del país. A ello debe agregarse el comportamiento del centro político, la Democracia Cristiana, obnubilada por sus intereses políticos organizacionales y por la preservación de un rol de liderazgo autónomo e incapaz de comprender el carácter radicalmente popular del Gobierno y, por lo tanto, la naturaleza necesaria que debía asumir su derrocamiento. Esta predominancia de sus intereses organizacionales le impide tanto apoyar en un inicio al gobierno UP como liderar posteriormente el bloque de oposición debiendo plegarse a la estrategia de derrocamiento y sus consecuencias sin ninguna condición.

En cuarto lugar, hay también transformaciones importantes en los sectores populares, como actor social. Así, la diversificación y heterogeneidad de estos sectores adquiere un carácter práctico que repercute en el desarrollo general de la conducción del proceso político y de transformaciones estructurales y en el modo como es percibido por aquéllos. En efecto, la conducción de las transformaciones centrada en la creación de un área de propiedad estatal, si bien se orienta a la redefinición general de los procesos de acumulación y crecimiento, satisface intereses inmediatos de un sector muy reducido del proletariado minero y urbano industrial, aquél que se define por una relación estable con el sistema productivo y que cuenta con el mayor grado de cohesión y organización. Pero en un proceso que desata las dinámicas populares y que se inscribe en el desarrollo de una crisis política que penetra y polariza todos los niveles de la sociedad, grandes sectores populares enfrentan una contradicción entre su potencial de movilización y su efecto transformador en los niveles de conciencia y las exigencias o requerimientos que plantea la dinámica de transformación estructural. De modo que se produce un desdoblamiento entre el apoyo general y cada vez más radicalizado al proceso y al Gobierno que lo encabeza, y las demandas y reivindicaciones propias como sujetos actores y creadores de ese mismo proceso que los invoca como su principio de legitimidad. Esta captación de sí mismos como sujetos, esta afirmación de su identidad, se hace en términos de lo popular, desbordando el puro elemento relativo al proceso de producción, y es vivido y formulado en términos del poder propio frente a un enemigo que amenaza también su vida cotidiana (boycot, mercado negro, acapara-

miento). Necesariamente ello tiene efectos de desborde tanto de la racionalidad del modelo de transformación económica —y un ejemplo de ello son las ocupaciones y tomas de empresas y predios no considerados en la estrategia de estatización y reforma que son vividas como el clímax de la liberación—, como de las estructuras clasistas y políticas de representación existentes —y un ejemplo de ello es la creación de organizaciones populares destinadas a defender y a gestionar el consumo, el proceso productivo, el ámbito territorial o la salud—. Atribuir todo ello a una pura estrategia de grupos políticos radicalizados de izquierda fue un error frecuente en los análisis de la época. Parte de las contradicciones de la UP expresadas en el plano político tienen su raíz en este fenómeno ya anotado de la heterogeneidad de los sectores populares y por lo tanto de sus experiencias y niveles de conciencia durante el proceso.

En quinto lugar, y para finalizar este breve análisis de las modificaciones ocurridas en los actores y fuerzas sociales, es necesario referirse a las fuerzas armadas. La capacidad del sistema político de resolver sus conflictos a través de mecanismos de algún modo consensuales en la elite política había ido confinando a las fuerzas armadas a sus tareas profesionales y desarrollando así en ellos una ideología “profesionalizante” y “constitucionalista”. Este relativo enclaustramiento de las fuerzas armadas en tareas castrenses y su sujeción al poder político, cuyas raíces históricas no es el caso analizar aquí, dificultaban el desarrollo de un proyecto político autónomo y reforzaban más bien su papel como grupo de presión. No obstante, este aislamiento de la sociedad política tenía su contraparte en las estrechas vinculaciones que se habían ido desarrollando en las últimas décadas y especialmente en la década del 60, entre las fuerzas armadas chilenas y las norteamericanas.<sup>26</sup> Más allá de los aspectos relativos al aprovisionamiento militar, tales vinculaciones se daban en un amplio espectro de instituciones y organizaciones comunes que se habían creado y consolidado. En ellas tienden a primar las concepciones vinculadas a las doctrinas de la contrasubversión, donde la visión de la guerra fría y el alineamiento de América Latina en el bloque hegemónico por Estados Unidos habían ido desplazando su objetivo —en especial como consecuencia de la Revolución cubana— a los peligros de la subversión interna. El “enemigo” en esta guerra dejaba de estar fuera de las fronteras y actuaba “desde dentro” de la nación ya sea infiltrando sus instituciones, ya sea organizando la subversión. En esta concepción, las fuerzas armadas aparecen como los baluartes supremos de la nación, como el último resorte frente a la crisis. Ello tiene un doble efecto. Por un lado, otorga a las Fuerzas Armadas una concepción muy alta de sí misma por encima de las divisiones contingentes de grupos y clases en conflicto y un rol mesiánico frente a la crisis. Al referir la lucha contrasubversiva no

<sup>26</sup> Lo que sigue ha sido desarrollado en G. Arriagada y M. A. Garretón, *Doctrina de Seguridad Nacional y régimen militar* (en *Estudios Sociales Centroamericanos*, Nos. 20 y 21).

sólo al plano militar, sino económico, político, cultural, se va pavimentando el desarrollo de un papel protagónico en la escena política y de una conciencia de un proyecto político autónomo. Por otro lado, la incapacidad ya mencionada de formular un proyecto político o de sociedad que no fuera la pura presencia militar para "salvar un país en crisis" y volverlo a su "destino de gran nación", le da a estas concepciones de la Seguridad Nacional, en la que se socializan varias generaciones de militantes, el papel de sustituto de un proyecto político. Constituyen tanto un "campo de selección de alternativas" para la percepción subjetiva de la situación como el único "arsenal de conceptos" que dan la ilusión de un proyecto político y una alternativa programática una vez que se produzca la ruptura.

La importancia asignada a las fuerzas armadas durante el gobierno de la Unidad Popular y su incorporación a tareas de la vida política civil, fueron despertando su conciencia respecto a un rol político autónomo. Este se manifestó incipientemente cuando son llamadas institucionalmente a participar en el gobierno después de la crisis de octubre de 1972, pero en términos de apoyo a un gobierno constitucional y en la esperanza de moderar su carácter revolucionario. Cuando la crisis política se ha desarrollado y el apoyo a dicho gobierno tendría por finalidad detener la insurrección y permitir el desarrollo de su política de transformaciones, han madurado en el seno de las fuerzas armadas rasgos semejantes a los planteados para los sectores medios y se ha fortalecido la idea de su rol político autónomo en el que juegan los factores ideológicos señalados más arriba. A ello se agrega la percepción de su unidad y de su cohesión jerárquica como condiciones indispensables para el cumplimiento de su rol de dirimir la crisis política, lo que llevó a la marginación de los sectores "constitucionalistas". Eliminado este último obstáculo y asegurada la unidad en torno a una alternativa propia de poder, y la consolidación del modelo autoritario en el liderazgo del bloque opositor, las fuerzas armadas pasarán a asumir el arbitraje del conflicto político, pero no en términos neutros, sino en términos de un proyecto de dominación cuyo contenido material no podía estar dado sino por la alternativa de reestabilización y recomposición del capitalismo dependiente, ligado a las tendencias de la economía capitalista mundial, y desligado de las trabas participacionistas o redistributivistas propias del desarrollo social chileno.

Al término del proceso político 1970-1973, la sociedad chilena ha experimentando, en términos esquemáticos, dos transformaciones sustanciales. Por un lado, el proceso de democratización ha alcanzado sus máximos niveles, no sólo en términos de una mayor tendencia a la igualdad en la apropiación de los beneficios sociales,<sup>27</sup> sino en el plano de la parti-

<sup>27</sup> La demostración de esto en José Serra y Arturo León, *La redistribución del ingreso en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Éxito y frustración.* (FLACSO, Documento de Trabajo, 1978). También Humberto Vega, *La política económica...* op. cit.

cipación, organización y conciencia política populares. Sin embargo esta explosión de la presencia popular en la que se vive, por parte de vastos y significativos sectores, una experiencia de liberación en que los viejos privilegios sociales son abolidos, no logra proyectarse a muchos otros sectores significativos de la sociedad, contribuyendo al aislamiento de los primeros y a la radicalización opositora por parte de los últimos. La conciencia igualitaria y la afirmación de la organización popular como expresión de poder, son un resultado de profundas consecuencias para el proyecto de dominación emergente de la ruptura, como veremos más adelante. Por otro lado, las bases del esquema de desarrollo capitalista dependiente han sido desarticuladas y se ha creado una base para un desarrollo —siempre en el modelo hacia adentro— alternativo, con el traspaso de resortes importantes del aparato económico al Estado. Sin embargo, tal desarticulación no dio paso a un sistema mínimo de reemplazo —tanto por la crisis provocada por el bloqueo económico de los Estados Unidos y la estrategia de los sectores dominantes de la economía, como por las insuficiencias de manejo de la Unidad Popular—, por lo que se expresó como capitalismo en descomposición con sus rasgos típicos de mercado negro, inflación desatada, especulación, acaparamiento, etcétera.<sup>28</sup>

La doble realidad descrita explica las tareas a enfrentar por parte del proyecto social que emergiera de una derrota del proceso, sobre lo que volveremos más adelante.

Si nos hemos detenido en los rasgos principales del desarrollo social chileno, no es por un mero afán histórico, sino porque pensamos que hay ciertos rasgos persistentes del mismo y ciertos factores acumulativos que van marcando un carácter determinado a estructuras y actores. Así, tales elementos no pertenecen a la historia pasada sino que se expresan de un modo u otro en la realidad presente. De modo que sus análisis nos permite discriminar cuáles son las fuerzas históricas que han jugado a favor o en contra de “otro desarrollo”, y qué papel pueden asumir en el futuro. Tales fuerzas y actores no son creación de hoy día y los problemas que presentan o enfrentan no han sido eliminados en la actual situación histórica, sino que agudizados y, sobre todo, redefinidos en una constelación cuya significación interesa desentrañar. Es a lo que nos referiremos a continuación.

### III. EL PROYECTO SOCIAL VIGENTE

Hemos señalado al iniciar estas páginas nuestro rechazo a considerar el régimen militar que se instaura a partir de septiembre de 1973 sólo

<sup>28</sup> Sobre una completa evaluación económica de la Unidad Popular, ver, entre otros, H. Vega, *op. cit.*; De Vylder, *op. cit.* y Sergio Bitar, *Economía Política del Gobierno de Allende*. (Harvard Institute for International Development, Agosto 1977).

como un paréntesis y nuestra convicción que se trata de un proyecto sociohistórico que intenta refundar la sociedad y revertir los patrones básicos del desarrollo social descrito. Hay en él un doble aspecto que es necesario distinguir. Por un lado, se trata de una contrarrevolución, es decir, de una reacción “contra” algo, “contra” el proceso social desarrollado los últimos años. Este aspecto privilegia la tarea de tipo coercitivo y también la de “normalización económica”, lo que pone como actores predominantes al aparato militar y a los poseedores del gran capital, entregándose la conducción de la política económica estatal a quien logre asegurar la racionalidad más global y menos particularizada del nuevo esquema económico.<sup>29</sup> Pero el aspecto reacción o contrarrevolucionario, no agota todo el proyecto socio histórico, instaurado en septiembre de 1973. Este incluye como hemos ya mencionado, un intento funcional. Se trata de un nuevo proyecto global de sociedad que de algún modo se plantea como negación del esquema general de desarrollo de los últimos cuarenta años. Ahora bien, ello no implica una afirmación sobre el éxito o viabilidad global de tal proyecto, sino sobre los posibles efectos transformadores que su progresivo intento de implementación tenga en la estructura social. Tales efectos serían datos a considerar en cualquier proyecto alternativo.

En qué consiste este nuevo proyecto de dominación, los nuevos problemas sociopolíticos que plantea y su evaluación respecto a las perspectivas de otro desarrollo, serán los puntos que trataremos a continuación. El punto de partida es la convergencia y conexión necesaria entre un modelo de desarrollo económico, una base material, y un esquema político. Esta conexión indisoluble, cuyas determinantes se alimentan mutuamente, nos parece un elemento crucial en el análisis y su negligencia está en el origen de no pocas confusiones. Tal convergencia coincidió a su vez con una constelación internacional que en su origen la favorece, aun cuando después se produzcan importantes contradicciones al respecto, como lo veremos más adelante.

El esquema económico parte de una crítica radical al modelo de desarrollo llamado “hacia adentro”, caracterizado en esta crítica por el intervencionismo estatal que deja el crecimiento entregado a las veleidades demagógicas de los gobiernos, con lo que se impide la acumulación, la asignación adecuada de los recursos y donde la inflación aparece como el mecanismo ilusorio de resolución de las contradicciones, con las consecuencias de inestabilidad y retraso inevitables. La implantación de un modelo alternativo busca una nueva inserción en el sistema económico mundial basada en las “ventajas comparativas” nacionales, otorgarle al

<sup>29</sup> Se trata de los discípulos de la “Escuela de Chicago” de Milton Friedman. A ello nos referiremos más adelante. Por el momento vale la pena señalar que la garantía de la nacionalidad global del modelo económico que otorga este grupo, pasa por la “concesión” de un muy alto gasto militar, lo que sería más difícil de obtener de los sectores empresariales más interesados en drenar recursos del Estado hacia ellos.

mercado el rol fundamental de asignación de los recursos, y al capital privado extranjero y nacional el rol motor del desarrollo. Ello supone la reducción drástica del rol del Estado y la desarticulación de su aparato, la reducción y contención también drástica del costo del factor trabajo, y la formulación de una estrategia de desarrollo basada en la apertura al comercio exterior orientando el aparato productivo hacia las actividades con ventajas comparativas, principalmente de exportación. Las metas principales de corto plazo son la estabilidad, es decir la reducción de la inflación, y el equilibrio de la balanza de pagos. La ideología sustentadora consagra la libre competencia en el mercado como la base de todas las libertades y la eficiencia "privada" en contraste con la ineficiencia estatal.<sup>30</sup>

En las condiciones del desarrollo social chileno descrito, la implantación de este modelo exige ciertas "cláusulas" en relación al proceso de democratización, agudizado los últimos años. Ellas dicen relación con la movilización social y su presión por demandas y reivindicaciones de corte igualitario que impedirían crear las bases de una nueva acumulación. De allí que sea necesario eliminar las interferencias participacionistas y contener bruscamente las demandas sociales. Frente a los sectores populares, ello no puede hacerse sino sobre la base de la represión masiva, la desarticulación de sus organizaciones de clase y políticas, la supresión del derecho a huelga. Frente a los sectores medios, ello implica transformar su movilización política activa contra las últimas fases del proceso democratizador en aceptación pasiva del nuevo sistema, lo que lleva necesariamente a la manipulación de los elementos traumáticos entre los que se cuentan el terror al "caos y la anarquía", combinados con la difusión de las esperanzas de un futuro "chorreo" de los beneficios de un despegue económico que será el premio a los sacrificios de la hora presente. Al

<sup>30</sup> Sobre el actual modelo económico, entre otros, Sergio Alvear y Ulises Pinto, *Chile un nuevo modelo de acumulación*. (Ediciones ABC, Madrid 1977); Mario Lanzarotti y Carlos Ominami, "La estrategia económica de la Junta Militar chilena: ¿Consolidación o deriva?" (En Revista *Chile-América*, Roma, noviembre-diciembre 1977); Humberto Vega, et al., *Modelo de desarrollo y Política económica en Chile: 1973-1977*. (Documento de Trabajo, Academia de Humanismo Cristiano, 1978); Mill S.T., "Balance económico de 4 años". (En Revista *Mensaje*, Santiago, N° 262, 1977); Ricardo French Davis, "La política de comercio exterior en 1974-1977". (En Revista *Mensaje*, Santiago, N° 266, 1978). Desde la perspectiva favorable al modelo, ver las *Exposiciones de la Hacienda Pública*. Ministerio de Hacienda y Dirección de Presupuesto, octubre 1974, octubre 1975, noviembre 1976 y enero 1978.

Insistamos en que cuando hablamos de modelo económico nos referimos a un fenómeno mucho más amplio que una política económica de corto o mediano plazo, y que tampoco se confunde con una "estrategia" de crecimiento o desarrollo. Un modelo económico o base material o modelo de desarrollo (usaremos indistintamente estos términos), abarca, sin desconocer sus autonomías, diversos niveles de la vida social. La apología del modelo actual tiende a confundir e identificar todos estos aspectos, con lo que el modelo de desarrollo se "reifica" en una estrategia y política económicas.

mismo tiempo se trata de “limpiar” el mercado de productores e intermediarios ineficientes. Todo ello, exige necesariamente de un modelo autoritario que despoja al sistema político de su carácter mediador y deja la dominación del Estado en su carácter de poder desnudo. El actor capaz de realizar tal ruptura y asegurarla es naturalmente el que posee el monopolio de la fuerza física.<sup>31</sup>

Esta unidad indisoluble entre modelo económico y modelo político, ha sido reconocida por algunos en su carácter genético pero negada en cuanto a las perspectivas futuras, en la medida que la maduración del modelo económico no haría ya necesarias las condiciones de su implantación y permitiría crecientes grados de liberalización. Así, el “modelo económico” actual podría subsistir en gran medida con un régimen político democrático futuro. Tal opinión parece ser compartida por muchos que centran su crítica en el modelo político y que buscan lo “rescatable” del modelo económico en un nuevo modelo político. Ello pareciera reforzarse en los análisis que se hacen, por un lado, del mejoramiento de algunos indicadores económicos a partir de 1975 y del “éxito” obtenido en la baja de la inflación y el equilibrio de la balanza de pagos.<sup>32</sup> Por otro lado, en

<sup>31</sup> Vale la pena recordar que de alguna manera este modelo económico había sido ya postulado por los sectores dominantes de la economía hacia fines de la década del 60, como lo muestran el Programa de la Nueva República del entonces candidato presidencial Jorge Alessandri, ciertos rasgos y tendencias de grupos económicos de la época, y declaraciones de líderes y organismos empresariales.

<sup>32</sup> La tasa de inflación anual, medida por el Índice de Precios al Consumidor, fue 34,9 en 1970; 508,1 en 1973; 376,9 en 1974; 340,7 en 1975; 174,3 en 1976; 63,5 en 1977 y 17,6 entre diciembre 1977 y julio 1978. El ipc fue reducido a través de manipulaciones en un 47% a fines de 1973. La inflación actual, habiéndose atenuado por la vía represiva la lucha por la distribución del producto, oculta el traslado de recursos del sector secundario al capital financiero y a los grupos exportadores e importadores, y la consolidación de éstos como “los grupos dinámicos”. No hay ahora “inflación de demanda”, sino “de costos” que refleja las nuevas tasas de ganancia y explotación. (Cfr. H. Vega, *Modelo económico...*, *op. cit.*)

En cuanto al Comercio Exterior el saldo de la Balanza de Pagos (en millones de dólares de 1976) fue de 188 en 1970; —151,9 en 1973; —51,5 en 1974; —287,2 en 1975; +455 en 1976 y +17 en 1977. El saldo de la Balanza Comercial (en millones de dólares de 1976) en esos años fue +257,9; —158,8; +257,9; —251,4; +489; —119. Las exportaciones no tradicionales sumaron (misma equivalencia y mismos años) 27,9; 13,7; 78,5; 125,7; 177,1; 234,0. Las exportaciones semi-tradicionales sumaron 165,5; 130,9; 264,0; 217,0; 359,3; 388,4. Las exportaciones tradicionales sin cobre sumaron 307,8; 217,5; 257,0; 309; 298,7; 314,3. Este éxito de la política de promoción de exportaciones no se debe a la “mano invisible”, sino a la política cambiaria, al sacrificio de los niveles de consumo interno, a facilidades tributarias. (Cfr. Huberto Vega, *Modelo económico...* *op. cit.*)

En cuanto a la producción, el Gasto del Producto Geográfico Bruto (que mide la capacidad de movilización interna) con índice 100 en 1973, fue de 96,4 en 1970; 104,1 en 1974; 90,4 en 1975; 94 en 1976 y 102,4 en 1977. Pero este aumento en relación a 1970, en términos per cápita muestra que los niveles de “recuperación económica” son aún inferiores a 1970 y 1973; el pcrpb per cápita, con índice 100 en 1973, fue de 101,8 en 1970; 102,2 en 1974; 87,1 en 1975; 89 en 1976 y 95,9 en 1977. (Cfr. H. Vega, *Modelo económico...* *op. cit.*)

la consideración de una relativa mayor "liberalización" de lo político que se habría traducido en la apelación a una nueva institucionalidad, la restauración futura de una democracia basada en plazos relativamente inciertos y el "mejoramiento" de la situación de los "derechos humanos" en relación a los primeros años de gobierno militar. Desde un punto de vista ideológico, ello aparecería también reforzado con el abandono paulatino, como ideología de legitimación del régimen, de la "doctrina" de seguridad nacional, que identificando la nación con el Estado y el gobierno militar definía un país en guerra contra un enemigo interno, y su progresivo reemplazo por un principio de legitimación basado en la creación de una "nueva institucionalidad".<sup>33</sup> Por último, en esta línea de argumentación, los fenómenos de concentración económica excesiva, de orientación hacia un capitalismo especulativo o de altas tasas permanentes de desempleo, son vistos como "efectos negativos" del modelo, como consecuencias no necesarias del mismo y susceptibles de ser modificados.

Tales argumentaciones tienden a descontextualizar el problema y no pocos de ellos caen en la ilusión tecnocrática. Se olvida así que un modelo económico es también un modelo de sociedad y que tras las "consecuencias negativas" hay actores sociales que las impulsan, y no necesariamente por siniestras voluntades, sino por intereses objetivos internalizados y hechos conciencia subjetiva. Un modelo económico trae aparejado un proyecto global de dominación. Es claro que en el caso chileno este proyecto no ha cristalizado en lo que algunos han definido como el proyecto histórico de los nuevos regímenes militares en América Latina, la "profundización" del capitalismo dependiente, sino que precisamente por los énfasis dados a la apertura irrestricta al exterior y a los fenómenos financiero-especulativos, estemos más bien en presencia de un proyecto de "reestabilización, extensión y recomposición" capitalista dependiente, con una nueva forma de engarzamiento en las tendencias capitalistas mundiales y donde el Estado genera las condiciones de ese engarzamiento pero abandona su papel de interlocutor "nacional".<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Sobre la ideología de Seguridad Nacional, ver Arriagada y Garretón, *op cit.* Sobre la nueva institucionalidad como principio de legitimación, mi trabajo "De la seguridad nacional a la nueva institucionalidad. Notas sobre la trayectoria ideológica del nuevo Estado autoritario". (*Revista Mexicana de Sociología* 4/78).

<sup>34</sup> El concepto "profundización" del capitalismo dependiente, que alude al logro de una mayor integración vertical de la estructura productiva —dirección distinta a la del modelo chileno— ha sido desarrollado por Guillermo O'Donnell en *Reflexiones sobre las tendencias de cambio en el Estado burocrático-autoritario*. (Documento CEDES, N° 1 Buenos Aires, 1975), relativizado por él mismo para las diversas situaciones en *Nuevas reflexiones sobre el Estado burocrático-autoritario*. (Mimeo, Buenos Aires, 1977) y discutido por Hirschman, Albert, "The turn to authoritarianism in Latin America and the search for its economic determinant", y José Serra, "The economic connection: note on the deepening hypothesis". (Trabajos presentados al Seminario sobre el Estado Burocrático-Autoritario auspiciado por el Social Science Research Council, Florida, 1977). Algunos de los rasgos con que O'Donnell caracteriza estos regímenes militares, han sido retomados acá.

Como quiera que sea, hay dos consecuencias que son importantes de anotar. En primer lugar, un proyecto de refundación capitalista con una nueva fórmula de acumulación y reproducción es algo más que un simple esquema de política económica. Es ello, pero también es modelo de desarrollo y ello significa, como hemos dicho, proyecto social. Como tal, el conjunto de instancias y esferas de la vida social intentan ser reordenadas y reformuladas. Basta citar las profundas transformaciones que se busca consolidar en el sistema educacional, en el aparato normativo que rige las relaciones de producción, en el sistema de valores culturales, en la estructura agraria, en la desarticulación del aparato estatal, en el sistema de organización y representación social. Sobre ello volveremos más adelante. Tales transformaciones no corresponden al paréntesis que al “madurar” el modelo económico, permiten restablecer la normalidad o vigencia anterior. Por el contrario, parece tratarse de transformaciones que se exigen las unas a las otras, que se apoyan mutuamente y que en conjunto van conformando un nuevo orden social. De modo que el llamado a la “nueva institucionalidad”, no es un puro llamado al restablecimiento de un régimen político que se establece en el vacío. La nueva institucionalidad no es sino la consagración institucional, la cristalización normativa de esas transformaciones.<sup>35</sup> Sin negar la autonomía de los niveles institucionales y normativos, es evidente que ellos se ponen al servicio de lo que ocurre en la vida social. En otras palabras, lo que se institucionaliza son precisamente las consecuencias que el modelo económico y el esquema político acarrearán en los diversos planos de la vida social. Desde esta perspectiva, por ejemplo, el “mejoramiento de la situación de los derechos humanos” no es sino el reconocimiento que ya no son necesarias las medidas iniciales al respecto por cuanto ellas ya forman parte de la nueva sociedad que se construye;<sup>36</sup> la invocación de nuevos principios de legitimación se ubica en una línea de continuidad con los principios anteriores, de modo que seguridad nacional y nueva institucionalidad son dos caras de una misma ideología y legitimación; los fenómenos de concentración, desempleo, redistribución del ingreso profundamente negativa,<sup>37</sup> son ya parte constitu-

<sup>35</sup> Dos ejemplos significativos al respecto son el Decreto Ley N° 2247, publicado en el Diario Oficial del 9 de Junio de 1978, por el cual se derogan las disposiciones fundamentales de la Reforma Agraria, y el DL N° 2200 de junio 1978 con modificaciones sustanciales al Código del Trabajo en el sentido de eliminación de derechos laborales consagrados.

<sup>36</sup> Este punto ha sido desarrollado en M. A. Garretón, “En torno a la problemática actual de los derechos humanos. Derechos humanos y crisis social”. (En *Estudios Derechos Humanos*, N° 1, Vicaría de la Solidaridad, Santiago, 1978).

<sup>37</sup> Respecto a concentración económica, un par de datos ilustrativos. Para el año tributario 1975 (y lo más probable es que ello se haya acentuado a partir de esa fecha) 303 Sociedades Anónimas concentran el 25,7% del capital propio de todos los contribuyentes del país, el 42,4% del Activo Inmovilizado y el 24,6% de las utilidades totales según balance. Si se toman todas las formas jurídicas de empresas, se llega a que el 1,69% de las empresas controlan el 64% del Activo inmovilizado y el 55% de las utilidades según balance. (Cfr. H. Vega, *Modelo económico...*, op. cit.)

tiva de la sociedad. La invocación de un nuevo régimen político queda entonces condicionada a los requerimientos de "maduración" estructural y de los niveles de conciencia y comportamiento sociales. Mientras ello no ocurra, sus plazos se harán variar permanentemente y sus formas específicas se anunciarán de distintos modos según sea el grado de presión de la base social que la sufre o de los grupos dominantes que reivindican intereses parcialmente conflictivos. Y esta incapacidad de definir un régimen político estable que no sean variaciones de grados del poder militar actual no es un hecho banal, sino que apunta a una de las contradicciones principales del régimen. En efecto, la alternativa que se intenta implementar, en la medida que revierte drásticamente las tendencias democratizadoras —con todos sus rasgos contradictorios y ambivalentes anotados— ante masas y actores movilizadas políticamente en la época precedente, exige la desarticulación de sus organizaciones y mecanismos de expresión sociales, es decir, exige el "vacío social", que es llenado por la coerción y el control social. Se define así un modelo de Estado, pero se es incapaz de definir un régimen político, es decir, una relación estable y mediada entre Estado y sociedad civil. De algún modo, cualquier canal que se establezca corre el riesgo de ser desbordado por las presiones y demandas de quienes sufren, en grado mayor o menor, los rigores del modelo económico. La presión y la negociación de la "base social", deben ser eliminadas. Pero, por otro lado, ello tiende a reforzar el aislamiento de la cúpula gobernante a medida que crecen las disparidades en ella sobre el reparto del "costo social" y sobre el futuro institucional que sancionará las posiciones relativas de poder. Necesidad de crear lazos estables con la "base social" y amenaza permanente de su desborde, configuran una contradicción insuperable de un modelo de sociedad cuya base material es excluyente en lo social y lo político por las necesidades y formas de la acumulación y los sistemas de redistribución de los beneficios. De modo que, en la medida que los plazos de maduración "irre-

Sobre desempleo, ver A. León, "Desocupación que indican las cifras" (en *Revista Mensaje*, Santiago, N° 267, 1978). La tasa de desocupación a nivel nacional fue sin incluir el Programa de Empleo Mínimo, para 1975 de 14,5; 13,7 en 1976 y 10,5 en 1977. Si se incluye el Programa del Empleo Mínimo en la desocupación, las tasas a nivel nacional son 16,9 (1975); 17,9 (1976) y 15,9 (1977). (Cfr. H. Vega, *Modelo económico...*, op. cit.).

En cuanto a la redistribución negativa del ingreso, algunos datos ilustrativos. El "índice de remuneraciones", que mide el efecto conjunto de la desocupación y los ingresos, con base 100 en 1971, fue de 65,6 en 1977, inferior al de 1970. Las remuneraciones mínimas con base 100 en 1970, fueron de 112,4 en 1971 y 84,8 en 1977. El índice de sueldos y salarios con base 100 en 1970 marcó 81,7 para 1977. (Cfr. H. Vega, *Modelo económico...*, op. cit.).

El gasto social del Estado (Educación, Salud, Vivienda, Previsión), que tiene normalmente efectos redistributivos a favor de los sectores de menores ingresos (ver A. Foxley y J. P. Arellano, "El Estado y las desigualdades sociales", en *Revista Mensaje*, Santiago, N° 261, 1977), bajó en términos per cápita de 91 dólares en 1970 y 146 dólares en 1972, a 97 en 1974; 68 en 1975; 70 en 1976 y 78 en 1977 (Cfr. H. Vega, *Modelo económico...*, op. cit.).

versible" del nuevo proyecto de sociedad son imposibles de fijar, los plazos y formas de retorno a la democracia o la "normalidad institucional" estarán siempre sujetos a la discrecionalidad del poder militar, cuya vigencia aparece como la única garantía de esa "irreversibilidad".<sup>38</sup> Ello sin perjuicio de cambios internos en ese poder o de nuevas formas institucionales de adaptación que a la larga puedan desembocar en alguna forma de "democracia restringida" cuya tutela será siempre el poder armado.

La segunda consecuencia, ligada a rasgos ya anotados que nos interesa resaltar, es que el proyecto de extensión y recomposición del capitalismo dependiente chileno "doblado" de un modelo político autoritario, se revela incapaz de plantearse como un proyecto nacional, en la medida que consolida "dos países", uno muy reducido "incorporado" a los beneficios del "milagro" y el otro, el vasto sector marginado que espera la difusión inalcanzable de los beneficios. Entre los sectores dominantes, la invocación de la nación aparece como una pura formulación ideológica en la medida que se cristaliza una profunda desintegración interna, que se internacionaliza su economía y que se desarticulan el aparato y los mecanismos de quien puede ser el único interlocutor frente al poder económico transnacional, el Estado. Esta consolidación de dos países se expresa en la conciencia dominante en un doble mecanismo. Por un lado, en una crítica radical a la historia de que es portadora esa nación en las cuatro últimas décadas. Por otro, en que por primera vez en esa historia se deja de invocar la soberanía y la representación popular como el principio de la legitimación del gobierno.

Estamos así mucho más lejos de "otro desarrollo" que en los modelos anteriores.

Es cierto que el patrón seguido hasta 1970 presentaba contradicciones importantes desde este punto de vista, que hemos señalado, tales como la progresiva dependencia económica, la no incorporación de la dimensión ecológica, la tendencia a la concentración económica y la marginalización de ciertos sectores, el carácter desigualitario del acceso de los bienes y servicios sociales, la debilidad y falta de autonomía de las organizaciones sociales frente al poder político, el centralismo que marginaba del desarrollo social y económico a provincias y regiones, una industrialización no orientada a las necesidades básicas, un Estado que coartaba los proyectos globales de transformación y que escondía en el aislamiento de las fuerzas armadas su capacidad latente de arbitrar a favor del *statu quo*. Es cierto también que en el proyecto que intenta establecerse a partir de 1970, predominaba una cierta concepción industrializadora que dejaba

<sup>38</sup> Los plazos dados por los economistas del régimen a la "recuperación" y "despegue" de la economía son coincidentes con los anunciados para la denominada "nueva institucionalidad", pese a las variaciones permanentes de éstos. Por otro lado, los proyectos constitucionales del régimen tienden a incorporar en ese rango los rasgos básicos del modelo económico y a darle a las fuerzas armadas un rol de tipo tutelar.

pendiente el problema de engarzamiento o aislamiento en la economía mundial, se privilegiaban los intereses de las organizaciones populares más "incorporadas", se identificaba el proceso de socialización profunda con el crecimiento del aparato del Estado, no se resolvía adecuadamente la debilidad de las organizaciones sociales, y en su formulación se aislaba a sectores que podrían haber sido integrados en una mayoría nacional capaz de apoyar la envergadura de las transformaciones. Pero es igualmente cierto que las tendencias contradictorias del esquema prevaeciente hacia 1970 afirmaban en forma coartada y parcial algunos de los objetivos de otro desarrollo y abrían una dinámica que adquiere mayor globalización a partir de 1970.

Por lo contrario, la progresividad o la apertura de márgenes hacia "otro desarrollo" ha sido eliminada en el actual esquema de dominación. Junto a las profundas desigualdades sociales y a la desintegración económica nacional, él llevaría a la sociedad a un proceso definido por algunos como de "banalización", en que el país dejaría de ser un proyecto viable y se encerraría en una definitiva segmentación, dejaría de ser un pueblo con proyecto y se condenaría a una vida vegetativa.

Pero más allá de la racionalidad de un proyecto de dominación y de las contradicciones que amenazan su viabilidad, vale la pena hacer algunas consideraciones sobre las posibles transformaciones que parecen haberse introducido en la sociedad y cuyos efectos a futuro no siempre es fácil discernir.

En primer lugar, la desarticulación del aparato económico del Estado a través de una ola masiva de entrega de empresas al capital nacional y extranjero. No sólo empresas y aparatos de coordinación de diversas esferas de la vida económica que fueron incorporados al Estado durante el período 1970-1973, sino instrumentos y herramientas que se identifican con todo el proceso económico desde la década del 30. Esta desarticulación del aparato operativo o directivo del Estado en estas materias va acompañado de la profunda reducción y reestructuración del sistema normativo al respecto.<sup>39</sup>

En segundo lugar, la importancia preponderante que adquiere el capital financiero y el cambio consecuente en el carácter de los monopolios que se articulan en torno a él, con un desmedro relativo de los intereses industriales.

El receso y reorientación de las actividades productivas lleva a una disminución del peso del sector industrial y su reorientación hacia el sector de importación. Este relativo desmembramiento del aparato industrial,

<sup>39</sup> Por ejemplo, la derogación de leyes que permitían intervención económica del Estado, la desarticulación de organismos estatales como la Corporación de la Reforma Agraria, etcétera. De las empresas que constituían el Área de Propiedad Social, se han devuelto a manos privadas 246 (50,4%), son privatizables 220 (45,1%) y sólo se considerarán estratégicas 22 (4,5%) que en 1978 se redujeron a 18. (Cfr. H. Vega, *Modelo económico...*, op. cit. Datos para 1978).

con la expulsión del sector laboral, y la preponderancia que adquieren las actividades productivas orientadas hacia la exportación, principalmente la agro-industria, y el comercio de importaciones, es una de las transformaciones más importantes del modelo económico que se implanta.<sup>40</sup>

En tercer lugar, la estructura agraria es también invadida por el modelo económico, revirtiendo el proceso de reforma agraria que entre 1965 y 1973 había beneficiado alrededor de 60,000 familias, liquidado el latifundio y establecido formas de trabajo socializadas, además de haber organizado al campesinado. Esta reversión opera principalmente a través de diversos mecanismos: la devolución de predios a los antiguos propietarios, que favorece la reconstitución de un nuevo tipo de gran propiedad, junto a la privatización de gran parte de la agroindustria estatal; la asignación individual de parcelas a los campesinos descapitalizados desarticulando las formas más socializadas de tenencia; la expulsión del sector reformado de alrededor de 30,000 campesinos que quedan sin trabajo o deben incorporarse como subcontratados de sus antiguos compañeros del sector reformado; la liquidación de gran parte del aparato estatal de créditos, asistencia técnica y apoyo al campesinado, con lo que se fomenta un área de agricultura atrasada que se agrega al minifundio; y, finalmente, la creación y estímulo de un mercado de tierras a través de la venta por parte de parceleros asignados que se ven ahogados por las razones anotadas antes, y de la autorización de compra de tierras a sociedades anónimas de gran capital, etcétera. Junto a ello, el deterioro del salario agrícola —en lo que juegan como factores coadyuvantes, entre otros, la desarticulación del movimiento sindical, la pérdida de vigencia de la legislación que protegía al campesino, la depresión del mercado de trabajo urbano que cierra el escape tradicional del campesino cesante y el desplazamiento de una masa campesina del sector reformado que refuerza el contingente de reserva—, la concentración del crédito agrícola, el término de la función estatal en la asignación de recursos, la fusión de grupos empresariales del agro con grupos económicos de gran poder en la banca y las finanzas, todo ello en un contexto de una economía libre de mercado, intentan la generación de una dinámica capitalista en la agricultura cuya

<sup>40</sup> El sector primario que en 1970 representaba 18,89%, en 1977 era el 21,92%; el sector secundario disminuyó de 28,56 a 23,09 y el sector terciario aumentó de 52,55% a 54,99%, y ello con una baja del CPGB per cápita. (ver Nota 32).

Respecto a la importancia del capital financiero, el sector "Bancas, Seguros y financieras" de tener un 4,01% de generación de valor agregado en 1970 y un 3,4% en 1973; pasa a tener un 5,62% del Gasto del Producto Geográfico Bruto en 1977, según cifras de ODEPLAN. Las tasas de interés reales de los bancos, sin considerar el costo de los avales que aumentan la ganancia del capital financiero, fueron de 15,9% en 1975; de 62,8% en 1976 y 57,1 en 1977. Las tasas de interés reales de las financieras, sin considerar el costo de los avales, fue de 59,1% en 1975; 72,5% en 1976 y 64,5% en 1977. (Cfr. H. Vega, *Modelo económico...*, op. cit.)

tendencia central es el fortalecimiento de la gran propiedad y el capital concentrado de los grupos más poderosos.<sup>41</sup>

En cuarto lugar, el sistema educacional ha sufrido transformaciones cuyos efectos son difíciles aún de medir.<sup>42</sup> Por un lado, se trata de transformaciones que dicen relación con la restricción en el grado de cobertura y el aumento de su carácter selectivo, en la medida que han disminuido drásticamente las políticas asistenciales a la población escolar y que la situación económica lleva a aumentos significativos de deserción.<sup>43</sup> Por otro lado, transformaciones cualitativas como la entrega de parte significativa del sistema de enseñanza media, cual es la enseñanza técnico profesional, a las organizaciones de los grandes empresarios, o, en otro plano, el control y rigidización de los planes y programas de la enseñanza básica y media; la eliminación de contenidos en las asignaturas de ciencias sociales, los énfasis en los aspectos formales, en los contenidos nacionalistas y en actividades escolares paramilitares. Todo ello tiende a configurar un proceso educativo en que se reducen los márgenes de desarrollo de la

<sup>41</sup> Hemos utilizado aquí especialmente la información proporcionada por José M. Arteaga, *Cambios recientes en la tenencia de la tierra en Chile. Algunas hipótesis*. (FLACSO, Santiago 1978). Sobre la reversión de la reforma agraria y la situación campesina, así como sobre la función asignada a la agricultura, ver además, C. Riker *Modificaciones en la tenencia de la tierra realizadas por el régimen militar chileno 1973-1976*. (Santiago, mimeo 1976); Alvear y Pinto, *Chile un nuevo modelo de acumulación*, op. cit., (cap. IX); Sergio Gómez, *La organización campesina y la reforma agraria en Chile 1965-1977*, op. cit.; José Franco M. "La agricultura, ¿un sector a la deriva?". (En Revista *Mensaje*, Santiago, N° 258, 1977) y "Dimensiones de la agricultura, recursos naturales y estrategia de desarrollo". (En Revista *Mensaje*, Santiago, N° 268, 1978); O. Valenzuela, "Condiciones de vida de los campesinos". (En Revista *Mensaje*, Santiago, N° 260, 1977); F. Justiniano y R. Suazo, "Problemas de los campesinos". (En Revista *Mensaje*, Santiago, N° 265, 1977).

<sup>42</sup> Sobre las transformaciones en el sistema educacional, entre otros, Julián Bermúdez, *Sistema educacional y requerimientos del desarrollo nacional. La educación chilena en el período 1964-1974*. (Santiago, mimeo, 1975); Pedro Castro, *La educación en Chile de Frei a Pinochet*. (Ediciones Sígueme. Tierra 2/3. Salamanca, España, 1977); P. Bulé, "Elementos para el análisis crítico del sistema cultural vigente". (En F. Gil, et al. *Chile 1970-1973. Lecciones de una experiencia*. Ed. Tecnos, Madrid, 1977); Alfonso Bravo, "Interrogantes en la educación chilena". (En *Mensaje*, Santiago, N° 251, 1976).

<sup>43</sup> Datos sobre cobertura del sistema educativo en la bibliografía citada en la nota anterior y en O. Saldías, "Selectividad en la educación chilena". (En Revista *Mensaje*, Santiago, diciembre 1976). Donde la reducción ha sido mayor es sin duda al nivel universitario. Como dato ilustrativo, las vacantes ofrecidas para el primer año fueron 39.276 en 1973 y 33.283 en 1978. El porcentaje de absorción de postulantes a educación superior por parte de las Universidades que fue entre 1971 y 1973 de un 54,7%, descendió a 40,6% entre 1974 y 1978. En cuanto a la disminución de la asistencialidad escolar, si comparamos los años 1972 y 1976 los desayunos escolares disminuyeron en 46,9%, los almuerzos en 52,6%, las becas en 94,6%, los préstamos universitarios en 54,5% (Cfr. C. E. Beca y M. A. Garretón, *Libertad educacional y cultural. Visión de la educación chilena en el período 1973-1976*. Santiago, mimeo, 1976).

capacidad crítica. En la Universidad, el conjunto de medidas de política universitaria (intervención militar y sistema vertical de decisiones por delegación, con eliminación de las instancias académicas de discusión, reducción drástica del personal universitario y de las vacantes, reimplantación del esquema profesionalizante, introducción del sistema de autofinanciamiento con el alza significativa de los costos de matrícula, eliminación del movimiento estudiantil organizado y su intento de reemplazo por organizaciones oficiales, etcétera), parecieran obedecer a una doble racionalidad. Por un lado, se trata de revertir radicalmente lo que hemos descrito como el modelo de la reforma universitaria, tanto en sus principios o dinamismos universalizables como en su concreción como Universidad de capas medias, y ello por cuanto estos sectores dejan de ser elementos claves o motores del esquema de desarrollo social y la estabilidad de éste ya no reposa en la "alianza" con ellos. Por otro, se asiste a un intento de refundación de la Universidad en términos de su adecuación a los requerimientos del modelo económico social. Es así como las tendencias fundamentales parecieran indicar que de espacio cultural parcialmente crítico y de lugar de reproducción o movilidad de sectores medios, ella pasaría a constituirse en un espacio de control cultural para sectores con tendencia al desarrollo de pensamiento crítico y en un lugar de selección de élites tecnocráticas según los requerimientos de las empresas y, en parte menor, del Estado. La intervención militar de las universidades cumpliría el rol de asegurar el soñado "punto de no retorno" del modelo.<sup>44</sup>

En quinto lugar, el sistema de organización y representación sociales sufre un fuerte impacto. La tendencia general es a producir un vacío de organizaciones sociales que junto a los rasgos anotados respecto al sistema educativo, y al control y banalización de los medios de comunicación de masas, rebajen los niveles de racionalidad, refuercen el temor y el aislamiento e impidan formas orgánicas de comunicación y expresión colectiva. El intento de desmantelamiento de los partidos políticos y su dramática persecución y represión apuntan precisamente en esa dirección.<sup>45</sup> Sin embargo, junto a estos rasgos que buscan materializarse y penetrar la sociedad, subsiste una realidad más compleja y contradictoria que señala los límites del proyecto descrito.

<sup>44</sup> Sobre la situación de las Universidades, ver un completo análisis en L. Silver y J. P. Mery, *Las Universidades chilenas y la intervención militar*. (Santiago, 1975, mimeo).

<sup>45</sup> Un análisis de la situación jurídica de las organizaciones laborales en A. González, "La situación del movimiento sindical chileno", (en Revista *Mensaje*, Santiago, N° 248, 1976), y en Eugenio Bergliod, "La situación sindical después de cuatro años" (en Revista *Mensaje*, Santiago, diciembre 1977). Sobre situación jurídica de los partidos políticos y los medios de comunicación, consultar los estudios realizados por la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago y los *Estudios Sectoriales de la estructura social chilena* editados por CISEC, Santiago, durante 1976, 1977 y 1978.

Así, se produce en las distintas esferas de la sociedad un trasvasije de la base social hacia nuevas formas de organización y expresión que permiten buscar al menos la resolución de problemas inmediatos, pero también plantear intereses y proyectos más a largo plazo. Las organizaciones de cesantes, los talleres y comedores populares en las poblaciones obreras y marginales al amparo de instituciones como la Iglesia pero pugnando por su carácter autónomo; la proliferación de agrupaciones recreativas que permiten espacios menos controlados de organización y comunicación de los sectores populares, y de agrupaciones culturales, folklóricas o académicas al margen de las instituciones oficiales en el caso de los sectores juveniles, estudiantiles y profesionales; el desarrollo de nuevas formas reivindicativas del movimiento obrero que refuerzan sus capacidades autónomas y al mismo tiempo ponen en jaque la capacidad represiva del sistema; la mantención significativa de los aparatos partidarios, aun en su existencia clandestina, que ha obligado a buscar nuevas formas de vinculación con las masas y a criticar ciertas prácticas tradicionales en esta relación a veces instrumental o manipulativa; la creación progresiva de nuevos espacios de expresión; todo ello constituye un contrabalance de la tendencia dominante.

Es sumamente difícil y no exenta de riesgos una evaluación cabal de las potencialidades del fenómeno descrito. Sin profundizar en ello, señalemos al menos dos aspectos relevantes. Por un lado, es evidente el valor germinal de los rasgos anotados, su creciente significación a lo largo de estos años y su papel de contrasistema social y cultural al menos defensivo. Por otro lado, hay también elementos contradictorios. Así, se trata de embriones a veces muy localizados que no siempre logran penetrar el conjunto de la masa a que debieran alcanzar; sus dificultades organizativas y financieras pueden crear nuevas formas de dependencia; la naturaleza diferente de cada una de estas formas organizativas dificultan necesariamente, en algunos casos, su globalización y proyección más allá de un campo específico. Y en cuanto a los partidos políticos, a causa de la represión ejercida contra ellos, hay al inicio un énfasis necesario en la mantención y reforzamiento de los aparatos, que tiene como efecto una pérdida relativa de su capacidad de irradiación y de presencia en los espacios más abiertos que se van creando, y también una tendencia a la afirmación de la identidad que dificulta necesariamente la capacidad auto-crítica y las posibilidades de refundar el sistema partidario a partir de las transformaciones en la estructura y conciencia de las clases y grupos sociales y de una recreación ideológica.

En sexto lugar, es evidente que el intento de implantación de un proyecto histórico social como el que venimos describiendo, ha debido afectar la estructura de clases y actores sociales. Tampoco tenemos aquí datos precisos al respecto y nuevamente hay que optar por la enunciación intuitiva de rasgos muy gruesos al respecto.

En lo que se refiere a las clases populares, es posible que la reorientación del aparato productivo, con el cierre significativo de empresas indus-

triales o su conversión a las actividades de importación, con la mantención de una tasa permanente de cesantía, y los procesos de redistribución negativa del ingreso, etcétera, introduzcan un nuevo proceso de diversificación de estos sectores con una probable disminución de aquellos que mantienen una inserción estable en el sistema productivo y un aumento de la cesantía disfrazada, y los trabajos temporales e inestables propios del subempleo. Ello tendería necesariamente a reforzar la masa flotante y marginal y a aumentar y agudizar los conflictos y reivindicaciones particularizados y sectoriales.<sup>46</sup> Este mismo fenómeno de diversificación y subproletarización podría inferirse de las transformaciones ocurridas en el sector agrario y que ya hemos enumerado. Es evidente que esta realidad debe producir a nivel de la conciencia individual y colectiva de estos sectores importantes efectos y que plantea nuevos problemas y desafíos de representación a las organizaciones de clase y políticas.

En lo que se refiere a los llamados sectores medios, pareciera producirse un doble movimiento. Por un lado, la drástica restricción de las oportunidades educacionales y del aparato estatal —dos elementos claves en que estos sectores basaban su reproducción y movilidad— apuntaría hacia una pauperización significativa, más que a la proletarización por las razones anotadas, de un conjunto más o menos importante de estos sectores que significarían una especie de nueva masa flotante o marginal de “cuello y corbata”. En el otro extremo y manteniendo siempre un gran sector sin variaciones cualitativas especialmente significativas, el modelo económico tendería a impulsar la consolidación de un sector en servicios particulares de alto rango que ve ampliamente elevados sus ingresos y alcanza niveles de vida insospechados identificándose tanto en ello, como en valores, actitudes y comportamientos, con los sectores dominantes.

En cuanto a estos últimos, cuatro fenómenos de diverso orden e importancia nos parece importante destacar. Ellos son el carácter predominante que adquieren los monopolios financieros ligados al sector de exportación por encima de los monopolios más tradicionales ligados a la industrialización sustitutiva;<sup>47</sup> el rol relevante que adquiere en el aparato del Estado como ejecutor este modelo de una tecnocracia homogénea y ortodoxa, socializada ciegameamente en la matriz intelectual de corrientes neoliberales extremas y cuya función es garantizar la racionalidad global del proyecto por encima de los intereses contingentes de las diversas fracciones capitalistas y la ortodoxia de la política económica ante la banca y las agencias internacionales, así como asegurar el gasto militar; la abdicación de los sectores dominantes de su representación política autónoma en aras de su identificación con el poder militar; y la expansión de los niveles de vida y consumo internacionalizados de estos sectores.

<sup>46</sup> La disminución del gasto social per cápita en salud, vivienda, educación, no hace sino acentuar estos problemas (ver Nota 37).

<sup>47</sup> Sobre las fracciones monopólicas, ver Luis Razeto, “Clases Sociales, crisis del Estado y militarismo en América Latina” (en Revista *Chile-América*, Roma, noviembre-diciembre 1977).

Finalmente, en relación a los actores sociales, hay un cambio significativo en las Fuerzas Armadas, debido al rol preponderante que han adquirido estos años, al cual no es ajeno la elevación insospechada de sus gastos tanto en lo que se refiere a dotación de material militar como a sus remuneraciones y niveles de vida consiguientes.<sup>48</sup> Es evidente que estos dos factores presionen hacia la cohesión y unidad internas en torno a la mantención del modelo económico y político. Pero también es cierto que el ejercicio del poder, la apertura de un debate sobre el costo social del modelo económico, el surgimiento de voces discrepantes entre los sectores de apoyo al poder militar, el aislamiento internacional producto del carácter represivo del sistema y de graves errores en la implementación de la política internacional, la incertidumbre del modelo político futuro, han introducido fisuras que afectan la unidad necesaria de las fuerzas armadas para la mantención del esquema general. Sin embargo, la ausencia de un proyecto socio político autónomo que no sea la pura vehiculización del proyecto de los grupos predominantes y la no percepción de una alternativa externa a ellos que cree consenso interno, tendería a reforzar la pauta personalista como único mecanismo de resolver las diferencias y conservar la unidad institucional. Sobre ello volveremos.

Por último, cabe referirse a las transformaciones o nuevos problemas que se presentan en el plano de la conciencia. Aquí la opacidad del sistema hace aún más difícil siquiera una descripción ajustada y, por supuesto, casi imposible una evaluación. Es plausible suponer que los fenómenos estructurales descritos y el carácter autoritario del sistema político, con todo el impacto de la desarticulación de los sistemas de mediación y relación sociales, hayan penetrado la conciencia individual y colectiva; pero no es posible precisar su grado de profundidad ni tampoco hasta qué punto los sistemas de defensa organizacionales y las nuevas formas de solidaridad a las que hemos aludido, los espacios y contrasistemas culturales abiertos y germinales, la irradiación de instituciones religiosas, hayan podido contrarrestar el impacto del sistema, fortalecido la resistencia mental y desarrollado la conciencia colectiva en otras direcciones. Es posible también que la extrema miseria, por un lado, y la restricción y los controles educacionales junto a la banalización cultural, a través de los medios de comunicación de masas, por el otro, hayan rebajado los niveles generales de racionalidad y criticidad y reforzado los comportamientos conformistas, fatalistas o anómicos. El impacto del temor en los sectores

<sup>48</sup> Los datos de gasto militar no pueden evaluarse a través del presupuesto. Un indicador interesante, aunque indirecto, lo da el servicio de la deuda externa de cargo fiscal cuyo grueso es gasto militar. El coeficiente del servicio de la deuda en relación a los ingresos totales de divisas fue de 31,9 en 1976 y de 36,9 en 1977; y en relación a los ingresos por exportaciones fue de 48,7 y de 57 respectivamente. En millones de dólares del año 1976, el servicio de la deuda externa de cargo fiscal fue 302,04 (1970); 304,73 (1971); 78,53 (1972); 105,46 (1973); 373,39 (1974); 411,18 (1975); 543,64 (1976) y 440,42 (1977). (Cfr. H. Vega, *Modelo económico...*, op. cit.).

populares, podría haber llevado a actitudes de desconfianza en las relaciones y organizaciones sociales y fomentado una tendencia aislacionista, y los niveles de subsistencia pueden haber incidido en comportamientos atomizados o no clasistas; pero pueden también haber fortalecido un sentimiento de identidad, de resistencia colectiva, y de confianza en las propias fuerzas más que en los sistemas de mediación elitarios. A nivel de los sectores medios, la destrucción del mito de su conciencia democrática es posible que haya introducido un desquiciamiento de su forma de ordenar el mundo, cediendo paso a una conciencia perpleja proclive al autoritarismo y al refugio en la ilusión de un nivel de vida donde la socialización, aunque a niveles de baratijas, del consumo internacionalizado favorecería una adhesión instintiva al modelo que la propaganda y el recuerdo traumático del pasado tienden a reforzar; también el mito de la despolitización puede haber reforzado la tendencia natural de estos sectores a la sacralización del "orden" y el terror a un pasado que les es presentado como el reino del caos y la anarquía. Pero, por otro lado, las restricciones educacionales y ocupacionales y la pérdida de un sistema de negociación con el que se identificaban pueden haber originado un hastiamiento generalizado con una revitalización de la adhesión a un régimen político abierto. En lo que se refiere a los sectores dominantes y a los grupos sociales que se incorporan a ellos, los altísimos niveles de vida, el desarrollo de una conciencia maniquea, su absoluta ignorancia, muchas veces deliberada, de los efectos de la represión, de la miseria y el sufrimiento populares, o su aceptación maquiavélica como "costos necesarios", la abdicación de organizaciones autónomas de expresión política, parecen fomentar una conciencia del "todo o nada", de la única y última oportunidad, que lleva a una adhesión y un aferramiento irrestricto y ciego al régimen actual. Ello no quita que sectores dominantes menos favorecidos, podrían desplazar su adhesión hacia fórmulas políticas o institucionales en que su "espacio de maniobra" se ampliara.<sup>49</sup>

Es difícil evaluar las hipótesis y dilemas presentados sobre penetración y transformaciones originadas por el proyecto histórico dominante. Con todo, es probable que los diversos rasgos de signo contrario señalados se den conjuntamente. Ello configuraría un panorama contradictorio, donde emergen las potencialidades de un proyecto alternativo de sociedad pero cuya constitución enfrentaría un cúmulo enorme de problemas. A ello podría agregarse un fenómeno de difícil precisión y medición, pero que puede formularse como el de creciente distanciamiento de las diversas élites respecto a los sectores que invocan como sus representados. El sofocamiento del movimiento social, el impacto regresivo de las políticas eco-

<sup>49</sup> No parece verosímil que estos sectores se conviertan en motores de un proceso de apertura democrática, pero sí que puedan verse obligados a aceptarla para buscar ahí su sobrevivencia. En determinadas fases ello no es incompatible "por definición" con un modelo alternativo de desarrollo. Los espacios que ésta ofrezca a tales sectores pueden ser determinantes en su reagrupación política autónoma del poder militar.

nómicas y los fenómenos culturales anotados pueden haber provocado un abismo, en el que la formulación de intereses, aspiraciones y proyectos sociales no siempre de cuenta de los que se desarrollan en las grandes masas. Esta distancia o tensión siempre existió en Chile, pero es posible pensar que en las últimas décadas o disminuyó o, al menos, no se acrecentó. En los últimos años esta distancia parece haber aumentado drásticamente, lo que genera problemas nuevos en la constitución de un proyecto alternativo donde la respuesta de los invocados tiende necesariamente a ser imputada o construida por parte de las cúpulas elitarias.<sup>50</sup>

Sin embargo, el énfasis en el carácter de la dominación y la tendencia a verla como un poder que se impone irrestricta y monolíticamente, oscurece a veces el análisis de las contradicciones y grietas de ese poder y sus dificultades de penetración de las zonas o espacios en que se afirman las resistencias sociales, y de los avances que se han ido produciendo en las fuerzas político sociales que pueden postularse como los pilares de un proyecto histórico alternativo. Algo hemos dicho respecto de las dificultades del proyecto dominante y los espacios que se abren. Señalemos en cuanto a los avances en las fuerzas político sociales alternativos al menos de algunos puntos en que parece haberse progresado hacia un cierto consenso. En el campo de las solidaridades mínimas o elementales frente al carácter represivo del sistema, en el diagnóstico sobre el carácter del régimen y su incapacidad para recuperar el sistema democrático, en la revalorización intrínseca de este último y de las libertades políticas, en las debilidades del esquema de organización social prevaleciente hasta la ruptura del 73, en la necesidad de redefinir el papel del Estado y fortalecer las organizaciones del movimiento social, en la necesidad de reencontrar las alternativas políticas con los problemas del país real y las grandes masas, en la necesidad de contar en Chile con la mayoría democrática para encarar un proyecto de sociedad alternativo viable, en todos estos campos es posible percibir una convergencia creciente entre lo que se ha denominado las "fuerzas de la negación". Aunque no siempre es fácil percibir cuánto de esta convergencia es puramente cupular y cuánto obedece a la presión de la base social, ella representa un paso indispensable en la constitución de proyectos sociales alternativos.

#### IV. EL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN, NUDO VITAL DEL OTRO DESARROLLO

La agudización de la crisis de la sociedad chilena analizada y la incapacidad del esquema de dominación vigente de resolverla y de ofrecerse como alternativa nacional de desarrollo, han puesto de relieve el tema de la democracia o la recuperación democrática como la única solución posible.

<sup>50</sup> La eliminación o dispersión interna o en el exilio de élites de instituciones y organizaciones sociales y políticas tiende a acentuar este problema.

Sin embargo, la pura formulación del tema, como proyecto alternativo, adolece de ambigüedades sobre las que vale la pena detenerse, antes de entrar a una consideración final sobre las relaciones entre proceso de democratización y "otro desarrollo".<sup>51</sup>

Hay una primera versión de la alternativa democrática sobre la que no vale la pena extenderse mucho en la medida que se presenta como una fórmula de pura continuidad respecto al actual esquema de dominación. Se trata de las concepciones vigentes en ciertas esferas de la cúpula en el poder, en torno a una democracia "autoritaria" y "restringida", donde el proyecto vigente mantiene su pauta con la excepción de una mayor presencia de los grupos civiles en el poder. Ello le otorga al poder militar una capacidad última de veto, que asegure que el juego político se restrinja a ciertos sectores de la sociedad con exclusión de otros y que la modalidad del desarrollo económico permanezca inalterada o, a lo más, alterada por las modificaciones que los grupos "aceptados" introduzcan. Este proyecto de democracia autoritaria y restringida surge como la búsqueda de una solución a las contradicciones que experimenta el régimen político actual, entre ellas su creciente aislamiento nacional e internacional y a la necesidad de acudir a un principio de legitimidad que invoque la voluntad popular ante las fisuras entre grupos de apoyo, pero no implica ningún cambio en el esquema de dominación y en el proyecto de sociedad que se busca implantar.<sup>52</sup>

Por otro lado, surge una alternativa crecientemente significativa que sí se plantea como opuesta al sistema vigente, y que tiende a ligarse a cierta concepción mesiánica del centro político y en parte a la aspiración de recuperar rápidamente sus mecanismos de reproducción política y social.<sup>53</sup> Ella postula la necesidad de reimplantar el régimen político democrático, como única fórmula de superar la crisis nacional y resolver sobre los futuros proyectos alternativos. Se llama así a un consenso en torno a esta recuperación democrática, que deberá reconocer ciertas etapas. En la primera de ellas, la de transición, se trataría de una suerte de democracia restringida en la que algunas fuerzas sociales, especialmente los sectores populares y sus organizaciones, o no emergen o lo hacen en forma vicaria, y donde las fuerzas armadas asumen un rol preponderante. Este período

<sup>51</sup> Debe quedar claro que nuestro análisis se ubica en un nivel en que no entramos en la discusión de coyuntura, sino que nos preocupan tendencias y procesos bastante más generales que van más allá de problemas de cambios cupulares o de corto plazo.

<sup>52</sup> Un planteamiento característico al respecto, en los discursos de A. Pinochet del 9 de julio de 1977 (llamado discurso de Chacarillas) y del 11 de septiembre de 1977.

<sup>53</sup> Este automesianismo del centro político alude a uno de los rasgos típicos de la Democracia Cristiana, que ha configurado una permanente política alternativista, muy diferente al rol tradicional del centro político (ver M. A. Garretón y T. Moulian, *Procesos y Bloques...*, *op. cit.* La alternativa de la "salida democrática" a que nos referimos en este párrafo da también mucha importancia a la recuperación de una "derecha democrática". Evidentemente, existen variantes en los supuestos que analizaremos.

de transición está acotado en el tiempo y da origen a un sistema democrático pleno en plazos breves y precisos. Tras esta proposición de recuperación del régimen político democrático —y sin que nos interese aquí entrar en una discusión detallada de sus variantes— hay dos supuestos principales aunque no necesariamente conscientes.

El primero de ellos remite a una concepción de la democracia como simple régimen político, como un conjunto de reglas del juego cuya estabilidad reposa en el mayor consenso que se establezca en torno a ellas. El segundo es que los procesos de transición democrática se producen principalmente por el desarrollo de contradicciones internas en el poder militar y por la presión externa, sobre todo, de los Estados Unidos.

Respecto al primer supuesto, éste desliga la democracia de su contenido material, del esquema de desarrollo, por un lado, y, por otro, parece desconocer la profundidad del régimen autoritario y su doble naturaleza que implica esquema de desarrollo y modelo político. En efecto, en estos países, y el esquema de desarrollo social chileno, reseñado en estas páginas así lo muestra, la democracia no es puro acuerdo sobre reglas del juego político, sino que reposa sobre una base material. Y quien dice base material dice intereses y articulación de demandas de clase y grupos sociales. Ahora bien, la parte “fuerte” de la democracia chilena, y pese a las ambigüedades de su formulación teórica por parte de su expresión política, reposó en gran medida en la presencia y apoyo popular, sin negar la adhesión de los sectores medios —ya analizada y relativizada— y del centro político. Pero esta presencia y apoyo del movimiento popular al sistema democrático se daba en la medida en que a través de ese sistema se abría paso un proceso más profundo de democratización global de la sociedad, de igualdad de oportunidades sociales, que cuestionaba estructuras y privilegios. Precisamente, la posible ambigüedad en el discurso teórico e ideológico sobre la democracia se basaba en los límites que el proceso político formal ponía al proceso de democratización “sustantiva”.<sup>54</sup> Así, los sectores populares vivieron la democracia como experiencia histórica no totalmente realizada, como proyecto parcialmente logrado y parcialmente frustrado, como experiencia que se recupera para ser superada. Son ellos quienes aparecen así identificados con un proceso y una experiencia que los sectores dominantes niegan no sólo en la práctica sino en sus formulaciones ideológicas y teóricas. De modo que sin la incorporación popular desde el inicio, no hay garantía estable de democracia, sino, a lo más, esporádicas “aperturas” que culminan en regresiones autoritarias y en una permanente inestabilidad. Ahora bien, al decir intereses y articulación de demandas populares, se alude obviamente a la inclusión de

<sup>54</sup> Nos estamos refiriendo a la crítica de la izquierda a la “democracia burguesa”. Ver al respecto T. Mouletto, *op. cit.* La adhesión más débil y ritualista al sistema político por parte de los sectores marginales urbanos y rurales ha sido discutida por Angel Flisfisch, *La masa marginal y la política* (FLACSO, Santiago, Documento de Trabajo, octubre 1976).

estos sectores en términos de sus organizaciones de clase y política,<sup>55</sup> pero sobre todo estamos aludiendo a la existencia de un modelo de desarrollo que integre y exprese esos intereses. Volvemos aquí —al menos para un país como Chile— a la vinculación entre modelo político y modelo económico. Así como la estabilidad del régimen constitucional hasta 1973 no puede entenderse sin las características del proceso de industrialización y del rol del Estado en él, así como su crisis está ligada al agotamiento de un determinado esquema de desarrollo capitalista dependiente, así como la dominación autoritaria no se explica totalmente sin su carácter de vehículo de un proyecto global de sociedad en términos del engarzamiento de los intereses del capital nacional en la economía mundial, así también no es posible pensar en una salida democrática estable que no ofrezca alternativas al contenido material de la dominación autoritaria. La no percepción de este problema lleva la ilusión de una “salida”, apoyada por sectores militares, pero que no es capaz de ofrecer una estabilidad que evite la tentación de la permanente irrupción militar para evitar desbordes.<sup>56</sup>

Todo ello nos lleva a concebir el problema de la “salida democrática” más como un acuerdo social que como un puro pacto en las cúpulas políticas. Es decir, obliga a referir al acuerdo en el modelo de desarrollo, orientado a la satisfacción de los intereses populares —con todo lo heterogéneo que éstos pueden ser— y esto no como una aspiración máxima u óptima susceptible de graduarse hacia consensos mínimos, sino como condición sine qua non de estabilidad y, por lo tanto, de viabilidad.<sup>57</sup>

Lo anterior significa afirmar que la democracia en Chile exige un sujeto histórico, un bloque que la sustenta más allá de las reglas del juego que establece, y en ese bloque, en ese sujeto, los sectores populares tienen una gravitación fundamental. Sin embargo, ello no evita el riesgo tradicional de estos sectores que es su tendencia al aislamiento y su dificultad para constituirse efectivamente como un movimiento de proyección nacional que integre intereses y sectores diferentes. En esto hay un problema no resuelto en los actores políticos que han expresado predominantemente al movimiento popular. En el caso del Partido Comunista su sólida implantación en los núcleos del proletariado urbano industrial y minero, unido a problemas de inflexibilidades teórico ideológicas, han rigidizado

<sup>55</sup> Sobre los problemas de representación partidaria de estos sectores, que no garantizan una representatividad a perpetuidad de ningún actor político específico, ver más adelante.

<sup>56</sup> Las dificultades de varios de los procesos de apertura o de transición a la democracia en países de América Latina, actualmente en curso, ilustran esta afirmación.

<sup>57</sup> Evidentemente no estamos hablando aquí de políticas o programas económicos, ni tampoco de todos los aspectos que comportaría una “estrategia” de desarrollo. Todos estos puntos son objeto de posibilidades muy diversas al interior de un modelo económico, que entendemos como una matriz estructural en que tienen cabida, entre otras cosas, los problemas de propiedad y relaciones sociales de producción y los espacios que sus diversas soluciones tienen para desarrollarse.

tradicionalmente su conducción política y dificultado su capacidad expresiva de otros sectores. En el caso del Partido Socialista, su representación de los sectores populares más heterogéneos y capas medias pauperizadas, han imposibilitado una estructura orgánica y una capacidad de conducción coherentes: ellos han sido sustituidos históricamente por un discurso abstracto en el que se pretende dar cuenta de todas las contradicciones que incluye y que en la década del 60 e inicios del 70 se expresó en fórmulas radicales que reproducían esta dificultad y aislamiento. Los otros partidos que se adhieren al movimiento popular, demasiado exclusivos y marcados por la búsqueda de su identidad y legitimidad en el movimiento popular, no parecen constituir alternativas al respecto aun cuando puedan encauzar sectores reducidos de relativamente alta significación.<sup>58</sup> Todo ello apunta a la necesidad de una profunda readecuación de las organizaciones políticas del movimiento popular en la formulación y gestión de un proyecto nacional que no se agote en su dimensión clasista. Este debe ser capaz de expresar e incorporar intereses y aspiraciones compatibles de otras capas sociales y resolver las ambigüedades teórico ideológicas sobre el modelo político, en la medida que el puro énfasis en el carácter sustantivo de la democratización no absorbe necesariamente las demandas de los sectores expresivos de las capas medias que tienden a ver en el juego político la condición de su subsistencia y reproducción. La reivindicación de una sociedad efectivamente democrática en todos sus niveles e instituciones no impide la especificidad de la demanda por el régimen político democrático y los derechos políticos que éste consagra, lo que coincide con la experiencia histórica del movimiento popular chileno.

El segundo supuesto de la "salida democrática" privilegia, como elementos claves para desencadenar una etapa o fase de transición, las contradicciones internas al poder militar y la presión internacional. El requisito de este supuesto es evitar la movilización social y los grandes acuerdos sociales, por cuanto la aglutinación de todas las fuerzas democráticas provocaría la contra aglutinación y rigidización del poder militar. En esta visión pareciera concebirse la "transición democrática" como una concesión de las fuerzas armadas producto de sus problemas internos y de la presión internacional. Así, pareciera desconocerse la significación de dos elementos que hemos ya analizado. Por un lado, la penetración del autoritarismo y la identificación con el modelo políticoeconómico en las fuerzas armadas que no aparenta ser un fenómeno superficial. De modo que la presión y la movilización sociales, la visibilidad de un acuerdo amplio que genera un bloque social estable para sustentar una alternativa, en vez de ser un peligro contra-aglutinador, parecen ser

<sup>58</sup> Sobre estos problemas de la representación política de los sectores populares, E. Faletto *et al.*, *Bases sociales de los partidos políticos* (Santiago, inédito, 1978), M. A. Garretón, *Continuidad y ruptura*, *op. cit.*, y M. A. Garretón y T. Moulian, *Procesos y bloques políticos*, *op. cit.*

condiciones *sine qua non* para un cambio en la dirección de las fuerzas armadas. Por otro lado, las consecuencias de la implantación del proyecto de dominación en las estructuras y la conciencia social. Los puros mecanismos formales de una transición no aseguran la recuperación de una conciencia democrática, la que exige una práctica de ejercicio efectivo y cotidiano de la soberanía popular. Tras gobiernos de transición que aseguran mecanismos formales de juego político producto de pactos culebreros, pueden esconderse formas larvadas de democracia "autoritaria", restringida o manipulativa. De ahí que los contenidos reivindicativos y la movilización social en torno a ellos —con los mecanismos y espacios que puedan irse conquistando— y no las puras fórmulas institucionales, son el núcleo central de un acuerdo social que pueda ir imponiendo un cambio de dirección en los diversos niveles de la sociedad.

Las posibilidades de una "salida democrática" aparecen, en diversas versiones, muy ligadas a la situación de aislamiento internacional y a la presión que, principalmente los Estados Unidos y también otros países e instituciones internacionales, puedan ejercer. Tal como mencionáramos en el capítulo anterior, la instauración del régimen vigente se situó en una constelación internacional relativamente favorable.<sup>59</sup> Ello es cierto al menos en dos aspectos fundamentales. Por un lado, en cuanto al tipo de inserción en el sistema mundial que el capital internacional asigna a las economías subdesarrolladas, producto de su crisis al comienzo de la década, lo que obliga a estas últimas a buscar sus "ventajas comparativas". El modelo económico que se impone en Chile a partir de fines de 1973 satisface largamente estos requerimientos. Por otro lado, las tendencias dominantes en la política norteamericana que habían contribuido a la "desestabilización" del gobierno de Allende, ven con buenos ojos el término de la experiencia de la Unidad Popular con su riesgoso efecto.

Sin embargo, a partir de ese momento inicial se desarrolla una creciente contradicción entre la inserción económica satisfactoria en el sistema económico mundial adecuándose a los requerimientos del capital transnacional, y la imposibilidad de una adecuada inserción en el sistema político mundial marcada por el aislamiento progresivo de Chile y debido a que su modelo político y su expresión ideológica externa de corte agresivo entran en contradicción tanto con las tendencias generales de la distensión mundial, como con el nuevo giro que toma la política exterior norteamericana a través de la revalorización ideológica de los derechos humanos y la democracia. Cualquiera sea la evaluación que se haga de este giro,<sup>60</sup> no puede desconocerse el hecho que su formulación obliga a

<sup>59</sup> Un análisis de la posición internacional del gobierno militar que hemos seguido de cerca en lo que viene, en Hugo Fruhling, *Proyecto social interno y política exterior. El caso del gobierno militar chileno* (Seminario de Relaciones Internacionales América Latina y su inserción en el sistema internacional, patrocinado por CLACSO y FLACSO, Santiago, mimeo, 1978).

<sup>60</sup> Un análisis al respecto en A. Lowenthal, *Jimmy Carter and Latin America: A new era or a small change?* (Borrador, circulación restringida. Washington, mayo 1978).

ciertas políticas —aunque defensivas— que sean coherentes con ella. La aceptación por parte del capital internacional y de las agencias estatales norteamericanas del modelo económico, y la impugnación del modelo político debido tanto a la percepción de su inestabilidad a largo plazo como a la necesidad de satisfacer una opinión pública interna<sup>61</sup> han llevado a plantear fórmulas como la de recambio en la cúpula gobernante, la de la democracia restringida u otras que buscan conciliar una pauta autoritaria y de contención de conflictos con la existencia de mecanismos democráticos formales, cuya viabilidad y estabilidad futura ya hemos discutido.<sup>62</sup>

De modo que la presión internacional hacia una “salida democrática”, es decir, hacia un cambio del modelo político, cuya existencia y valor no pueden negarse —en la medida que choca con la aceptación irrestricta por parte de los poderes internacionales de un modelo económico de inserción en la economía mundial cuyas mismas exigencias políticas son contradictorias con un régimen democrático—, no puede asegurar para sí sola esta salida y la posterga indefinidamente. Ello no quiere decir que las exigencias estructurales de una “salida democrática”, a las que nos hemos referido, y los actores que son capaces de imponerlas, no pueden abrirse un espacio en la escena económica y política internacional. Hoy es evidente

<sup>61</sup> Esta contradicción entre impugnación del modelo político y aceptación del modelo económico (aun cuando esta última no lo sea en igual grado por algunos poderes transnacionales que quisieran una situación más favorable respecto al desarrollo laboral que ampliara el mercado interno) tiene su expresión en la aparente contradicción entre un alto flujo de ayuda y créditos estatales norteamericanos y de agencias internacionales y la frustración de las expectativas de inversión extranjera. Así, la ayuda y créditos de agencias estatales norteamericanas aumentaron de 9,8 millones de dólares en 1973, a 116,7 millones en 1974, 179,1 millones en 1975 y 137,2 millones en 1976; la ayuda y créditos otorgados a Chile por las principales agencias internacionales fueron 57,6 millones de dólares en 1973, 158,4 millones en 1974, 262 millones en 1975 y 271,7 millones en 1976. Datos presentados por Sergio Bitar, “La intervención norteamericana en Chile”, en *Revista Chile-América*, Roma, septiembre-octubre 1977). En cambio la inversión extranjera directa, en millones de dólares de 1976, fue de 19,2 en 1974, —4,3 en 1975, —4,2 en 1976, 10 en 1977 y 140 en 1978, incluyendo esta última cifra estimada los 130 millones invertidos por Exxon en la Mina Disputada. (Datos presentados por M. Vega, *Modelo de desarrollo...*, *op. cit.*). Esta contradicción aparente entre ayuda crediticia y baja inversión estaría mostrando que de lo que se trata es de mantener “a flote” el modelo económico chileno como efecto demostración y ejemplo para otros países, pero que su esquema político no ofrece la aceptabilidad o estabilidad suficientes para comprometerse en apoyarlo a través de la inversión. Señalemos de paso que el creciente endeudamiento externo configura una de las importantes debilidades del modelo económico actual.

<sup>62</sup> Esta búsqueda de un sistema democrático que prevenga contra la movilización “desbordante” y, por lo tanto, que se concilie con su control, ha sido planteada en algunos estudios de indudable trascendencia en círculos oficiales norteamericanos. *Cfr.* Samuel Huntington, *Political order in changing societies* (Yale University Press, New Haven) y Michel Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanucki, *The crisis of the democracy*. (Report on the governability of democracies to the Trilateral Commission, New York University Press, 1975).

que tanto la distensión como la creciente multipolarización y las contradicciones en el mundo desarrollado, como la pérdida de la legitimidad de regímenes autoritarios, como la incapacidad de resolver la contradicción señalada y la pérdida de prestigio de una política exterior norteamericana que no pruebe efectivamente su éxito, abren un espacio para ello. Lo que nos ha interesado aquí ha sido solamente resaltar las contradicciones de las alternativas que se basan exclusivamente en las crisis internas del poder militar y en la presión internacional.

La discusión hecha hasta aquí intentaba problematizar el tema de la "salida democrática" concebido como la solución a la crisis nacional. Tal problematización se ha hecho a partir de la experiencia histórica chilena y de la situación actual, planteando la necesidad de reformular este tema como el de la profundización de la sociedad democrática, es decir, extendiéndolo más allá de los aspectos que definen el puro régimen político. Un proyecto social de profundización de la sociedad democrática, lo que implica considerar ineludiblemente tanto su sujeto histórico como la base material o modelo de desarrollo,<sup>63</sup> si bien es condición de viabilidad de la democracia política es también problemático. Y es aquí donde el tema de la democracia se encuentra con el tema del otro desarrollo.

La sola mención del otro desarrollo aparece como descontextualizada o utópica en una sociedad sometida a un proyecto de dominación como el vigente y donde la liberación de energías aparece como la condición indispensable para que la sociedad pueda al menos proponerse a sí misma un proyecto histórico de otro desarrollo e intentar encararlo. La democracia —como régimen político que se sostiene en y apunta a una reformulación más global de la sociedad— se convierte entonces en el "nudo vital" del otro desarrollo, en su condición básica pero también en su matriz. Si es así, democratización y otro desarrollo, sin confundirse o identificarse, convergen en ciertos requerimientos y ciertas metas comunes. Estas convergencias, en el caso chileno, indican también condiciones de viabilidad de ambos procesos aunque, insistimos, no agotan el tema del otro desarrollo en este país.

Así, surge la necesidad de redefinir el esquema de desarrollo. Como hemos dicho, los modelos y estrategias prevalecientes en las últimas décadas, presentaban obstáculos a los procesos de democratización y algunas contradicciones con las metas de otro desarrollo. Tales contradicciones son globales e insalvables en el caso del modelo actual. Es posible que pueda recuperarse la idea de un modelo de "apertura" al exterior compatible con un proceso de democratización en un desarrollo con metas

<sup>63</sup> Insistimos en que esta relación entre modelo económico y modelo político no implica ningún determinismo rígido. Es evidente que hay una autonomía de las fuerzas políticas en su capacidad de movilización para imponer tal o cual esquema de organización política, pero es evidente también que la viabilidad de éste depende de la capacidad de resolver las contradicciones y desigualdades sociales sin lo cual el consenso político es puramente aparental.

igualitarias, pero ello implicaría algunas condiciones básicas.<sup>64</sup> entre las cuales, una redefinición del papel del Estado. En este punto hay al menos dos problemas. Se trata de asegurar un Estado suficientemente fuerte como para garantizar la planificación y redistribución de recursos en función de la satisfacción de necesidades básicas, la protección de los recursos que no pueden entregarse a las fuerzas del mercado y su rol de interlocutor válido frente a los intereses transnacionales que obstaculizan un desarrollo de carácter nacional. Pero la omnipresencia del Estado en la sociedad civil y la debilidad tradicional de ésta frente al primero, deben dejar paso a la emergencia de organizaciones sociales vigorosas y autónomas. Por un lado, la necesaria alteración de la desigualdad básica en las relaciones de producción —sin la cual en estos países la democracia es ilusoria— no puede resolverse por la pura vía de las estatizaciones, por más que ellas marquen un adelanto respecto a las actuales estructuras monopólicas. Por otro, este fortalecimiento de la sociedad civil dice relación con la descentralización y vigorización de las estructuras económicas y sociales locales y regionales, con su participación en los diversos niveles de planificación y con la valorización de los intereses, demandas y presencias de categorías sociales que no se agotan en las dimensiones clasistas. Por último, el fortalecimiento de la sociedad democrática replantea la necesidad de repensar las estructuras político partidarias, muchas veces convertidas en sustitutos del movimiento social, y sobre todo, de asegurar el control por parte de la sociedad de la institución que posee en el Estado el monopolio de las fuerzas, las Fuerzas Armadas, lo que obliga a una reforma profunda de su estructura y funciones.

Todos estos temas requieren un tratamiento mucho más detallado que su mero enunciado, sin lo cual volvemos a que el otro desarrollo aparecerá todavía como una pura formulación demasiado vaga e inasible, como una expresión utópica de buena voluntad. Nuestra intención no ha sido, como lo expresamos al inicio de este trabajo, formular ni una estrategia al respecto ni analizar sus perspectivas de viabilidad, sino problematizar este tema desde el punto de vista de una sociedad compleja, con experiencias históricas profundas, con problemas acumulados no resueltos, enfrentada a una crisis dramática de su destino y cuya posibilidad de salida está sometida a inmensos interrogantes y desafíos, que sólo la movilización de sus fuerzas sociales podrá resolver.

<sup>64</sup> En efecto, debe insistirse en que no puede confundirse "estrategia de desarrollo" ("hacia adentro", "hacia afuera", etcétera) con modelo de desarrollo o modelo económico. Es corriente en los economistas apologistas del régimen identificar ambos aspectos con lo que una estrategia de crecimiento aparece indefectiblemente ligada a un determinado tipo de relaciones sociales de producción. Algunas de las condiciones que una estrategia de "apertura" debiera cumplir para compatibilizarse con un desarrollo de tendencia igualitaria —lo que implica una alteración radical del actual "modelo económico"— han sido planteadas por H. Vega en "Democracia y Desarrollo" (en Revista *Análisis*, Santiago, N° 6, julio de 1978).